



instituto nacional de estadística y censos

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

BOLETÍN JURÍDICO

Dr. José Rosero Moncayo
DIRECTOR EJECUTIVO

Quito - Ecuador
2014

INDICE

PRESENTACIÓN.....	6
-------------------	---

CRITERIOS JURÍDICOS

<u>Contrato de Comodato</u>	7
<u>Propiedad intelectual</u>	8
<u>Publicar información a nivel de Municipio</u>	9
<u>Suscripción de Convenios</u>	9
<u>Renovación de contratos</u>	11
<u>Pago de Viáticos por Residencia</u>	11
<u>Bienes Considerados para Baja</u>	12
<u>Especificaciones Técnicas de Uniformes de Personal</u>	13
<u>Mantenimiento de moto</u>	14
<u>Enajenación y/o Transferencia de Moto</u>	15
<u>Autorización Pago de Servicios</u>	16
<u>III Jornada de Probabilidad y Estadística</u>	17
<u>Reintegro gastos Comisión</u>	18
<u>Pago contra Factura</u>	19
<u>Pago contra Factura (ESCOPUSA)</u>	19
<u>Baja de Bienes</u>	20
<u>Baja de CD'S</u>	21
<u>Suscripción Convenios Zonal</u>	22
<u>Beneficios por Jubilación por Invalidez</u>	23
<u>Pago Deducible Siniestro Vehículo</u>	24

RESOLUCIONES INTERNAS

<u>Resoluciones 2013</u>	26-29
<u>Resoluciones 2014</u>	29-33

NORMAS INTERNAS PRINCIPALES

<u>Resolución No. 08-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	27
<u>Resolución No. 09-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	27
<u>Resolución No. 14-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	27
<u>Resolución No. 16-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	27

<u>Resolución No. 29-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	28
<u>Resolución No. 34-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	28
<u>Resolución No. 41-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	28
<u>Resolución No. 47-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	29
<u>Resolución No. 53-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	29
<u>Resolución No. 54-DIREJ-DIJU-NI-2013</u>	29
<u>Resolución No. 19-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	30
<u>Resolución No. 20-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	30
<u>Resolución No. 25-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	31
<u>Resolución No. 35-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	31
<u>Resolución No. 48-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	32
<u>Resolución No. 50-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	32
<u>Resolución No. 83-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	33
<u>Resolución No. 84-DIREJ-DIJU-NI-2014</u>	33

NORMAS TÉCNICAS

<u>Norma Técnica para el Uso de las Clasificaciones y Nomenclaturas contenidas en el Sistema Integrado de las Clasificaciones</u>	33
<u>Reglamento General para la Creación, Funcionamiento y Cierre de las Comisiones Especiales de Estadística</u>	33
<u>Código de Buenas Prácticas Estadísticas</u>	33
<u>Expide la Norma Técnica para la Producción de Estadística Básica</u>	33
<u>Norma Técnica del Sistema de Certificación de la Calidad de las Operaciones Estadísticas</u>	33

LEGISLACIÓN ECUATORIANA

<u>Constitución Política de la República</u>	34
<u>Ley Orgánica de Servicio Público</u>	34
<u>Reglamento General Ley Orgánica de Servicio Público</u>	34
<u>Estatuto del régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva</u>	34
<u>Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública</u>	34
<u>Ley de Estadística</u>	35
<u>Decreto Ejecutivo Nro. 77</u>	35
<u>Reglamento General Sustitutivo de Bienes Del Sector Público</u>	35
<u>Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos</u>	35

REFORMAS RELEVANTES LEGISLACION ECUATORIANA

<u>Implementación del gobierno electrónico en la Administración Pública Central</u>	35
<u>Reforma ERJAFE</u>	35
<u>Código Orgánico Monetario y Financiero</u>	36
<u>Norma Técnica para el Pago de Viáticos</u>	36
<u>Techos de negociación para la suscripción de contratos colectivos de trabajo</u>	36
<u>Instructivo para la Programación y Ejecución de Operativos de Control de Vehículos Oficiales</u>	36
<u>Sistema de Identificación, Marcación y Rastreo –SIMAR</u>	36
<u>Reformas al Reglamento General de la LOSEP</u>	37
<u>Reglamento Operativo del Sistema de Apoyos Económicos para el Programa Nacional de Vivienda Social SAV-BID</u>	37
<u>Normas técnicas para el sistema de liquidación y extinción de obligaciones entre entidades del sector público</u>	37
<u>Porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta</u>	37
<u>Reforma la Norma técnica para el pago de viáticos</u>	38
<u>Reformar la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos</u>	38
<u>Suspensión de la aplicación y ejecución del acuerdo ministerial No. MRL-2012-0094 de 5 de junio de 2012 y su reforma</u>	38
<u>Reglamento para el Registro de Trabajo y Actas de Finiquito</u>	39

CONSULTAS PROCURADURIA GENEAL DEL ESTADO

<u>Contratación directa: declaratoria de emergencia</u>	39
<u>Contrato: Amortización del anticipo, contrato modificadorio y terminación unilateral</u>	40
<u>Convenio de pago: Obligatoriedad de informar a la contraloría y procuraduría del convenio</u>	41
<u>Declaratoria de utilidad pública: Prevalencia de la Ley Posterior</u>	42
<u>Fondos de reserva: continuidad de aportes y antigüedad para el cálculo</u>	43
<u>Nepotismo: consejera</u>	44
<u>Nepotismo: Docente profesional triunfadora de concurso</u>	44
<u>Subrogación: Cargo que no corresponde a superior jerárquico</u>	45

<u>Subrogación: Computo para el pago, encargo</u>	46
<u>Subrogación: Jefatura financiera</u>	47
<u>Subrogación: Puestos que no son de nivel jerárquico superior</u>	48
<u>Renuncia voluntaria: Cálculo sobre los años laborados en el sector publico</u>	49
<u>Historia Laboral: Entrega de Información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos</u>	50
<u>Concesión de licencias</u>	57
<u>Documentos Públicos: Procedimiento para la Expedición de Copias Auténticas</u>	58
<u>Terminación Unilateral de Contrato de Consultoría: Improcedencia de Proceso de Arbitraje</u>	62
<u>Adjudicación de Contratos: Improcedencia de Contratar Personas Accionistas de una Compañía, como Servidores Públicos</u>	67
<u>Contratos Eventuales o Plazo Fijo</u>	69

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, es una entidad de derecho público creada mediante la Ley de Estadística, expedida por el Consejo Supremo de Gobierno con Decreto No. 323 de 27 de abril de 1976 y publicada en el Registro Oficial No. 82 de 7 de mayo de 1976, que mediante las atribuciones que le confiere la indicada Ley, se constituye en el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, siendo responsable de normar, planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas en el país.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 77 publicado en el Registro Oficial No. 81 de 16 de septiembre de 2013, el Señor Presidente Constitucional de la República, dispuso la Reorganización del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

En este sentido como órgano de la administración pública y seguros de que la aplicación adecuada de la normativa legal es el pilar fundamental para el desarrollo del Estado y de sus Instituciones, pone a disposición de los servidores y servidoras del INEC el presente Boletín Jurídico que es una recopilación de las principales disposiciones legales inherentes al quehacer institucional, así como la normativa administrativa y técnica interna del instituto y las absoluciones de consultas realizadas en el año 2014, con el propósito de orientar correctamente el accionar en las diversas labores generando de esta manera una cultura jurídica institucional.

Mcs. Abg. Marco Boada Márquez
DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA

CRITERIOS JURÍDICOS

Conforme lo establece el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva el criterio se lo debe tomar como elemento de opinión o juicio, para la formación de la voluntad administrativa. En el año 2014 el INEC ha emitido los siguientes criterios jurídicos que sirven de base fundamental para que la autoridad solicitante pueda tomar una decisión acertada:

Contrato de Comodato

El Director Ejecutivo mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. INEC-CZ8L-2014-3407-M, previo a autorizar la suscripción del contrato de comodato solicitado en el memorando mencionado, solicita emitir un criterio jurídico.

Base Legal

- Código Civil (Art. 2077 y siguientes)
- Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público (Art. 62 y siguientes)

Análisis

De lo manifestado tanto en los antecedentes como en la normativa jurídica citada, se colige que los artículos 2077 y siguientes del Código Civil en concordancia con el artículo 62 y siguientes del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, son los que regulan la naturaleza y viabilidad del contrato de comodato o préstamo. En este sentido, se desprende que el comodato o préstamo de uso es un contrato que por su naturaleza implica la restitución del bien al terminar el uso que constituye el objeto de dicho contrato, y que es procedente de acuerdo a la ley y el reglamento invocado celebrar este tipo de contratos, por lo tanto, admite que las entidades y organismos del sector público puedan celebrar contratos de comodato con entidades del sector público o personas jurídicas del sector privado, siempre que ello se relacione con una mejor prestación de un servicio público, favorezca el interés social y se establezcan las correspondientes garantías.

Criterio

Del análisis jurídico que precede, es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que es procedente que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través de la respectiva Coordinación Zonal, realice los trámites administrativos correspondientes con la finalidad de suscribir el Contrato de Comodato o Préstamo de Uso de la Guillotina Polar 78X, con la Empresa Pública EDUQUIL UG (Universidad de

Guayaquil). Recalcando que en el respectivo contrato que se elabore para el efecto, se establecerá todas y cada una de las cláusulas que regulen la forma de este préstamo dando aplicabilidad a lo que establece el Reglamento de Bienes.

Propiedad Intelectual

La Directora de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales, subrogante, solicita un documento oficial donde se indique y se justifique desde el aspecto jurídico la posibilidad de publicar datos puntuales, como la categoría de conservación de las especies del “Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador”

Base Legal

- Constitución de la República (Artículos 16, 18 numeral 2, 22)
- Ley de Propiedad Intelectual (Artículos 18, 19, 20, 26, 83)
- Código Civil (Art. 599 y siguientes)

Análisis

De la normativa jurídica citada se colige que los derechos del autor se encuentran protegidos por la ley, por lo que de conformidad por ley, por lo que de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal, para la publicación, reproducción o cualquier otro fin, se requiere la autorización del autor con el fin de evitar incurrir en las reclamaciones por daños y perjuicios. Por lo que cualquier acción que menoscabe la libre explotación de la obra del autor es ilícito. Sin embargo, no incurrir en la ilicitud antes mencionada, cuando se respetan los usos honrados y no afecten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos, conforme las excepciones contempladas en el artículo 83 de la referida Ley.

Criterio

Por lo expuesto es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que el INEC puede publicar datos puntuales, como la categoría de conservación de las especies del “Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador” de Diego Tirira, en el Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales (SIEA) en su página web, acogiendo a las excepciones establecidas en el artículo 83 de la Ley de Propiedad Intelectual, en las cuales no se requiere autorización del autor, siempre y cuando, como se ha expresado en líneas anteriores, se respete los usos honrados y no afecten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos de conformidad con la Constitución y la Ley, caso contrario, se requerirá la autorización del autor.

Publicar información a nivel de Municipio

La Directora de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales, subrogante solicita un documento oficial donde se indique y se justifique desde el aspecto jurídico la posibilidad de publicar resultados como la información de residuos, agua y gasto ambiental con desagregación a nivel de Municipio, sin que exista prohibición jurídica alguna de publicar la información en referencia.

Base Legal

- Constitución de la República (Artículos 18, 66, 225)
- Ley de Estadística (Artículos 20,21,22)
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículos 5,6,7)
- Ley Orgánica de Empresas Públicas (Artículos 45, 46)
- Código Integral Penal (Artículos 178, 179, 180)

Análisis

De lo manifestado tanto en los antecedentes como en la normativa jurídica citada se colige que todos los ciudadanos sobre quienes impera la ley ecuatoriana tienen derecho de acceder a la información pública de acuerdo a los principios constitucionales citados anteriormente, pero la información pública personal, considerada bajo los parámetros legales como información confidencial, que comprende aquella información derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, como por ejemplo: derecho al honor, intimidad, etc., no se encuentran sujetos al principio de publicidad, esto es, que no puede ser publicada ni difundida bajo ningún concepto, y que de hacerlo se puede causar un grave perjuicio en contra de la persona sobre quien se revela dicha información.

Criterio

Por lo expuesto es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que es posible realizar la publicación de información sobre residuos, agua y gasto ambiental con desagregación a nivel de Municipio, siempre y cuando esta información no sea considerada confidencial ni afecte los derechos personalísimos y fundamentales de una persona claramente establecidos en la Constitución y la Ley.

Suscripción de Convenios

El Director de Planificación solicita emita un criterio para la suscripción de convenios en las Coordinaciones Zonales respecto de: “La función de las Coordinaciones Zonales y Jefaturas de Planificación durante el proceso de negociación y elaboración de los Convenios que se realizan dentro del área de competencia de las

Coordinaciones Zonales”; y, “La autoridad que será responsable de la firma del mismo”.

Base Legal

- Constitución de la República (Artículos 225, 226, 229 inciso 1)
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Artículo 77)
- Ley de Modernización del Estado (Artículo 35)
- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (Artículo 54, 55, 56, 57)
- Ley Orgánica de Servicio Público (Artículo 6 inciso 4)

Análisis

De lo manifestado tanto en los antecedentes como en la normativa jurídica citada se colige que las atribuciones otorgadas a las Coordinaciones Zonales son las que se encuentran establecidas en el literal b) de la sección de los “Procesos Desconcentrados Zonales”, “Coordinación Zonal”, “Procesos Gobernantes” del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del INEC, haciendo especial énfasis en que a los servidores públicos solamente les está permitido hacer o realizar únicamente lo que les faculta o permite la ley. En este sentido, las funciones *“de las Coordinaciones Zonales y Jefaturas de Planificación durante el proceso de negociación y elaboración de los Convenios que se realizan dentro del área de competencia de las Coordinaciones Zonales”* se encuentran establecidas en la Resolución No. 053-DIREJ-DIJU-NI-2013 de 19 de diciembre de 2013, por lo que durante el proceso de negociación y elaboración de los Convenios corresponde observar el procedimiento establecido en dicha resolución. Pero la suscripción de los convenios, conforme lo determina la Resolución Nro. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014, de 21 de abril de 2014, en su Art. 1 numeral 4 el Director Ejecutivo, basado en los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, transparencia, evaluación, desconcentración, delega al Subdirector General del INEC “La suscripción de convenios interinstitucionales”

Criterio

Por lo expuesto es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que para el proceso de negociación y elaboración de los Convenios que se realizan dentro de la competencia de las Coordinaciones Zonales se tiene que observar y dar aplicabilidad la Resolución No. 053-DIREJ-DIJU-NI-2013 de 19 de diciembre de 2013; y para la suscripción de los convenios interinstitucionales la Resolución Nro. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014, de 21 de abril de 2014.

Renovación de contratos

El señor Coordinador General Administrativo, con la finalidad de proceder con el análisis de la renovación de los contratos al personal femenino que se encuentra en estado de gestación o que se encuentra en uso de su derecho de licencia por maternidad y/o lactancia, solicita al señor Director de Asesoría Jurídica indicar la base legal y el criterio jurídico correspondiente, en razón de motivar los informes técnicos que la Dirección de Talento Humano debe elaborar previo a la puesta en consideración y autorización del señor Director Ejecutivo para estos casos.

Base Legal

- Constitución de la República (Artículos 35, 43, 229)
- Convención sobre Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer publicada en el Registro Oficial 132 de 2 de diciembre de 1981 (Artículo 11 numeral 2)
- Convenio sobre la protección de la maternidad, expedido el quince de junio de dos mil por la Organización Internacional del Trabajo OIT: (Artículos 1, 2)

Análisis

De lo manifestado en la normativa jurídica citada se desprende que las servidoras que se encuentren en estado de gestación, son totalmente amparadas por la Constitución de la República ya que establece que son personas de atención prioritaria, así mismo se señala el ***Convenio sobre la protección de la maternidad, expedido el quince de junio de dos mil por la Organización Internacional del Trabajo OIT*** por tal motivo; se garantiza la efectividad de sus derecho a trabajar tanto para la mujer embarazada como para la que se encuentre en maternidad o lactancia.

Criterio

Por lo expuesto y al amparo de la normativa legal citada es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, aplicar lo que establece la Constitución de la Republica en su Art. 82 mismo que manifiesta: " El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto de la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras y publicas y aplicadas por autoridad competente", bajo este contexto tenemos la obligación de dar cumplimiento a la normativa legal expuesta en líneas que anteceden.

Pago de Viáticos por Residencia

El señor Coordinador General Administrativo, solicita al señor Director de Asesoría Jurídica Encargado, emita criterio jurídico sobre la legalidad de lo requerido por el Director de Planificación acerca del pago de viáticos por gastos de residencia y pago de transporte.

Base Legal

- Ley de Servicio Público (Artículos 3, 124)
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Servidor Público: (Artículos 273, 274, 275)
- Reglamento de gastos de residencia y transporte del sector público, resolución de la SENRES 147, registro Oficial 414 de 29-ago-2008 (Artículo 5)

Análisis

De lo manifestado en los antecedentes como también en la normativa jurídica citada se desprende que los servidores y servidoras tienen derecho al pago de viáticos por gastos de residencia en el momento que deban trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia para prestar sus servicios; siempre y cuando ocupen puestos establecidos en la escala de nivel jerárquico superior y las escalas de remuneraciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; así como también tienen derecho a cualquier medio de transporte para que puedan trasladarse a sus domicilios familiares habituales los fines de semana y feriados establecidos por la ley.

Criterio

Por lo expuesto, es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, dar aplicabilidad a lo que determina el Art. 82 de la Constitución de la República mismo que manifiesta: "El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes", del señalamiento de las normativa legal citada, así como de los antecedentes se colige que el Director de Planificación tendría derecho al pago de residencia, además del pago de pasaje de ida y retorno, para lo cual la Dirección de Talento Humano deberá emitir el informe técnico correspondiente.

Bienes Considerados para Baja

La señorita Directora Administrativa Financiera Encargada solicitó al señor Director Ejecutivo, autorice la baja de varios activos fijos, que en su parte pertinente manifiesta: " (...) los listados de bienes tanto de Activos Fijos como de Control Administrativo considerados para la baja respectivamente".

Base Legal

- Reglamento General Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público (11, 12, 13, 79)

Análisis

Mediante memorando No. INEC-DAF-2014-0040-M de 6 de enero de 2014, se solicita al señor Director Ejecutivo la autorización para proceder al trámite respectivo, para dar de baja los bienes institucionales tanto de activos fijos como de control administrativo del INEC que la señora Jefa de Almacén General entrega como anexos como resultado de la constatación física, sin embargo, no se adjunta el informe respectivo determinado en la normativa legal descrita, por lo que dando aplicabilidad, a lo determinado expresamente en los artículos 13 y 79 de la norma legal, es indispensable cumplir los procedimientos establecidos.

Criterio

Con estos antecedentes y amparado en el principio Constitucional de legalidad, considero que, el señor Director Ejecutivo en base a las competencias establecidas en la Ley, debe dar la autorización pertinente para dar inicio al trámite respectivo conforme procedimiento establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración y Bienes del Sector Público.

Especificaciones Técnicas de Uniformes de Personal

La Directora de Administración del Talento Humano solicita el criterio jurídico que permita determinar cuál de las disposiciones administrativas vigentes se debe aplicar en este proceso, con la finalidad de atender el requerimiento realizado por la Dirección Administrativa Financiera.

Base Legal

- Constitución de la República (Artículo 425)
- Ley Orgánica de Servicio Público (Artículo 51 literal a)
- Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público (Artículo 112, 228, 239)
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (artículo 10)

Análisis

El SERCOP a través de Resolución No. RE-IN COP-2013-000094 de 25 de julio de 2013, expidió las regulaciones para la adquisición de uniformes para los servidores administrativos del sector público, en cuyo Art. 2 establece la determinación de prendas que conforman el uniforme institucional: "...4 blusas y 2 ternos tratándose del personal femenino; y, 4 camisas y 2 ternos tratándose del personal masculino(...)"; en el Art. 4, determina que los uniformes deberán ser confeccionados con textiles que cumplan especificaciones técnicas generales previstas en las fichas anexas, con material de origen nacional. Con fecha 6 de septiembre de 2013, el Ministerio de Relaciones Laborales emite la Norma que regula el beneficio de uniformes para las y los servidores públicos, en el Art. 8 establece, que el valor por persona que las instituciones del Estado podrán destinar para uniformes será de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, más el Impuesto al Valor Agregado,

por lo que, conforme a las competencias del Ministerio se determina a quién debe entregárseles el uniforme, el valor, las prendas de vestir a ser utilizadas como uniformes, entre otras, no los procesos para el levantamiento del procedimiento de contratación que se debe aplicar; que es la competencia de SERCOP.

Criterio

Por lo expuesto, es criterio de esta Dirección que conforme lo determina la norma constitucional en su Art. 425, por jerarquía normativa el Acuerdo Ministerial se aplicará sobre las resoluciones emitidas por el SERCOP, antes INCOP, así como, por ser de competencia del Ministerio de Relaciones Laborales, es la Norma que regula el beneficio de uniformes para las y los servidores públicos la que debe ser tomada en cuenta de forma obligatoria para la dotación de uniformes al personal del INEC, siendo lo determinado en la Resolución No. RE-INCOP-2013-00094, un complemento a la norma enunciada en lo que no se contraponga.

Mantenimiento de moto

La señorita Directora Administrativa Financiera encargada, solicitó autorización para proceder a ejecutar el mantenimiento preventivo de la moto marca HONDA adquirida por el INEC a través del procedimiento de Ínfima Cuantía en la misma empresa, a fin de no perder la garantía técnica.

Base Legal

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Artículo 4, 76)
- Reglamento General a la ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública (Artículo 60)
- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (52.1)

Análisis

El INEC a través del proceso de Ínfima Cuantía, procedió a la adquisición de una moto, marca HONDA, año 2013, a la empresa INDUMOT S.A., por el valor de \$. 2.409,83, cuya formalización del procedimiento de contratación se lo realizó a través de la emisión y pago de la Factura No. 013-001-00-0013879 de 1 de octubre de 2013 y entrega de la moto, a la cual se acompaña un Manual de Garantía en el mismo que se establece en su parte pertinente que la garantía de la motocicleta es de 24 meses o 24.000Km, en cuyo texto se determina cumplir con algunas condiciones: “3. Haber efectuado revisiones periódicas y mantenimiento preventivos previos a la ocurrencia del daño en concesionario autorizado por HONDA”; y, establece además que se encontrará excluido de la garantía, cuando se sustituya y los trabajos de sustitución o reparación de las motos sean realizados por personas ajenas a HONDA.

Criterio

Por lo expuesto, y en razón de que es necesario cumplir con lo estipulado en el Manual de la Garantía, entregado por INDUMOT S.A., por ser parte de las condiciones convenidas entre el INEC y el oferente adjudicado, siendo éstas de cumplimiento obligatorio para las partes y de la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo de la moto conforme pedido de la Directora Administrativa Financiera, encargada, es criterio de esta Dirección que el INEC debe cumplir con las condiciones para aplicar la garantía a fin de no perderla, tomando en consideración la disposición del SERCOP publicada en el portal de compras públicas.

Enajenación y/o Transferencia de Moto

El señor Coordinador General Administrativo, solicita el Criterio Jurídico respecto al trámite que se debe aplicar para la enajenación y/o transferencia de moto

Base Legal

- Ordenanza Metropolitana No. 159 (Art. II. 375.6., Numeral 6)
- Reglamento General sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público (Artículo 4, 5, 13, 53, 79)
- Decreto Ejecutivo 1791-A (Artículo 1)

Análisis

De conformidad con los informes presentados por la CORPAIRE, se establece que la moto marca SUZUKI, modelo TS185, año 2009 de placa HL684L de propiedad del INEC, obtuvo un informe no favorable "PROHIBIDO CIRCULAR EN EL DMQ", y de que la señorita Director Administrativa Financiera, encargada mediante memorando No. INEC-DAF-2014-0716-M de 5 de marzo de 2014, informa que las Direcciones Zonales del INEC manifiestan que no tienen la necesidad de contar con este medio de transporte, es necesario aplicar el mecanismo mediante el cual se pueda dar utilidad a la mencionada moto, conforme lo que determina la norma jurídica para el efecto.

Criterio

Por la normativa legal antes mencionada, es criterio de esta Dirección que el bien antes mencionado se ha vuelto inservible, debido a que el estado mecánico y de seguridad activa y pasiva, así como el nivel de emisiones de gases contaminantes, ha impedido que la CORPAIRE emita un informe favorable para su movilización en el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con la Ordenanza Municipal No. 159; por lo que, amparado en lo que dispone el Decreto Ejecutivo 1791-A el INEC debe disponer la chatarrización de la moto luego de que sea declarado obsoleto o

inservible, sin dejar de observar lo prescrito en la Ley 106 en Beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del País, que trata de la transferencia gratuita, conforme lo que reza el Reglamento Sustitutivo al Manejo de Bienes del sector público; por lo que, cualquiera de los dos mecanismos antes citados son legalmente viables.

Autorización Pago de Servicios

La Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación solicita al señor Director Ejecutivo que: “ (...) el 10 de marzo de 2014 la unidad de aire acondicionado del data center sufrió un daño, el mismo que de manera urgente fue reparado por la empresa PROTECOMPU entre el 10 y 12 de marzo; este tipo de avería no está contemplada en el contrato de mantenimiento firmado con nuestra Institución, por tal motivo la empresa debe facturar por el costo de materiales y suministros que fueron cambiados en el equipo, cuyo valor asciende a Quinientos Ochenta y Ocho Dólares que incluye IVA (US.\$ 588,00); Con este antecedente, me permito solicitar a usted señor Director Ejecutivo, se digne autorizar a quien corresponda para que gestione un convenio de pago a favor de la empresa mencionada (...)”

Base Legal

- Constitución de la República (Artículos 11.- Numeral 5, 33, 226)
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (1, 117)

Análisis

De la normativa invocada, y en virtud de los justificativos presentados por la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación descritas en el antecedente del presente documento, se desprende que dando aplicabilidad a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas mismo que manifiesta que una institución pública cuando reciba bienes, obras o servicios está adquiriendo obligaciones que generan afectación presupuestaria y en virtud que se tiene los argumentos que la empresa PROTECOMPU ha presentado sus servicios al INEC, es procedente realizar el convenio de pago

Criterio

Por lo expuesto es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que es viable autorizar el pago de los servicios prestados por la empresa PROTECOMPU a través de un convenio de pago, para lo cual la Dirección Administrativa Financiera deberá emitir la correspondiente disponibilidad económica y partida presupuestaria a la que se aplicará dicho egreso.

III Jornada de Probabilidad y Estadística

El señor Director de Planificación, solicita autorizar la utilización de fondos institucionales para cubrir dichas participaciones con fondos de la partida 840103 del proyecto de inversión SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS para incrementar en las partidas de Pasajes al Exterior (730302) y Viáticos al Exterior (730304), para que los funcionarios: Luis Antamba y Lilia Quituisaca Samaniego participen en “III Jornada de Probabilidad y Estadística”, a realizarse en la Pontificia Universidad Católica del Perú del 13 al 15 de Agosto del 2014, en calidad de expositores representando al INEC una vez que sus trabajos han sido evaluados y aceptados en dicho evento internacional.

Base Legal

- Ley Orgánica de Servicio Público (Artículo 4)
- Reglamento General de la Ley ORGÁNICA de Servicio Público (Artículo 49)
- Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y Entidades Adscritas (Artículo 2, 3, 7)
- Acuerdo No. 699 de la Secretaría Nacional de la Administración Pública (artículo 3)

Criterio

De acuerdo a la normativa antes invocada, la Institución pueda utilizar fondos institucionales para financiar la participación de los servidores de la entidad en eventos internacionales tales como: foros, seminarios, talleres, cursos y cualquier actividad de naturaleza similar, siempre y cuando éstos tengan relación estricta y directa con las funciones del servidor y con las competencias de la entidad. Además las actividades a desarrollar en el exterior deberán propender a conocer programas y proyectos cuya naturaleza sea de interés para el Estado Ecuatoriano, conforme lo determina el Acuerdo No. 1101 de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, mediante el cual se expide el Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y Entidades Adscritas, por lo expuesto, es criterio de esta Dirección, que si la participación de los servidores: Luis Antamba y Lila Quituisaca Samaniego, responde a los requisitos antes mencionados, es procedente autorizar lo solicitado por el Director de Planificación. Cabe mencionar que la Dirección de Planificación en coordinación con la Unidad de Talento Humano son los encargados de verificar que se cumpla con todos los requisitos, siendo la UATH además la responsable de tramitar la solicitud a través del sistema, conforme el proceso dispuesto en el Acuerdo No. 699 de 15 de julio de 2014, expedido por el Secretario Nacional de la Administración Pública. Es necesario precisar que, es el INEC, quien deberá encargarse de tramitar y postular a los participantes a cualquier evento, a fin de mantener un adecuada coordinación y control.

Reintegro Gastos Comisión

Solicita criterio jurídico de que si es procedente o no realizar el reintegro de los gastos con copias de las facturas certificadas y copia del informe de la comisión de la señora Ninfa Ocaña, servidora de la Dirección de Cartografía Estadística fue traspapelado por la señora asistente de esa Dirección.

Base Legal

- Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros públicos (artículo 3)
- Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.- decreto ejecutivo 430 (artículo 1, 10, 11)
- Ley Notarial (artículo 18)
- Código de Procedimiento Civil (Art. 164, 167)

Análisis

La Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, establecen los parámetros para el reconocimiento de viáticos, subsistencias y pago de movilización para las y los servidores públicos y señalan que el Ministerio de Relaciones laborales elaborará el respectivo acuerdo ministerial para su correcta aplicación, siendo el Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0097, de cumplimiento obligatorio para las instituciones del estado señaladas en el Art. 3 de la LOSEP, por lo tanto, las y los servidores del INEC conforme lo estipula el Art. 23 de la disposición legal antes invocada deben presentar conjuntamente con el informe de comisión de servicios el listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales que justifican los gastos realizados, para que dichos gastos sean reconocidos por la entidad, en este caso en particular, las facturas de los gastos realizados en la comisión de servicios de la servidora Ninfa Ocaña, fueron extraviados por la asistente de Dirección, por lo que presentan copias de facturas certificadas y copia del informe, lo cual se contrapone a la disposición que de forma expresa establece que las facturas deben ser originales. Sin embargo, conforme las atribuciones de los notarios y aduciendo que se puede obtener un documento con plena validez jurídica y legal a través de la fe pública, se podría solicitar notariar las copias de las facturas.

Criterio

A fin de mantener un control y no contraponer las disposiciones legales mencionadas anteriormente es criterio de esta Dirección que se podría solicitar las facturas debidamente notariadas ante Notario del Cantón que corresponda, a fin de que dé fe pública de las mismas y tengan validez legal y jurídica.

Pago contra Factura

En atención a lo dispuesto por usted señor Director Ejecutivo, a través de comentario realizado en el sistema de gestión documental:

Base Legal

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (artículos 1, 22, 24)
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (artículo 64, 66)
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (artículos 115, 117)
- Resolución INCOP No. 013-09: disposiciones temporales que regulan los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles (artículo 3, 4)

Análisis

La Dirección Zonal del Litoral, realizó el proceso de contratación pública para el arrendamiento de las oficinas que ocupa el Proyecto Encuesta Condiciones de Vida, para el desarrollo y ejecución de sus actividades, contratos que fenecieron con fecha 31 de diciembre de 2013, los mismos que no serán renovados, por lo que, mientras la unidad de servicios administrativos zonal realice el proceso de contratación pública conforme lo determina la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, solicita la autorización del señor Director Ejecutivo para proceder al pago contra factura a partir de enero de 2014 por los meses que se demore el procedimiento de arrendamiento del inmueble y la suscripción de los contratos respectivos.

Criterio

Por lo expuesto, es criterio de esta Dirección que es procedente el pago contra factura del canon arrendaticio, mientras se realice el proceso de contratación pública, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública precautelando los principios de transparencia, legalidad, trato justo, igualdad y oportunidad, conforme las disposiciones emitidas en el Reglamento General a la LOSNCP y por el SERCOP a través de Resolución INCOP No. 013-009, el mismo que conforme al procedimiento establecido en el Manual de Contratación Pública del INEC y el levantamiento de procesos anteriores se lo realiza dentro de 30 a 60 días.

Pago contra Factura (ESCOPUSA)

En atención a la sumilla inserta en el sistema de gestión documental referente al pedido efectuado a través de memorando No. INEC-DICOS-2014-0042-M, por la Directora de Comunicación Social, pongo en su conocimiento señor Director Ejecutivo, lo siguiente:

Base Legal

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (artículos 1, 22, 24)
- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (artículo 64, 66)
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (artículos 115, 117)
- Resolución INCOP No. 013-09: disposiciones temporales que regulan los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles (artículo 3, 4)

Análisis

Con fecha 14 de mayo de 2013, el INEC y la empresa Estadística y Servicios de Control Publicitario ESCOPUSA S.A., suscribieron un contrato para la prestación de servicio de monitoreo en medios para ejecutar las actividades del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC-Oficina Matriz, producto del proceso de contratación SIE-INEC-006-2013, mismo que feneció el 31 de diciembre de 2013; la Dirección de Comunicación Social mediante memorando No, INEC-DICOS-2014-0042-M, solicita al señor Director Ejecutivo la autorización para proceder al pago contra factura del servicio en razón de que es de vital importancia para el desarrollo de las actividades de la Dirección, mientras se realice el procedimiento de contratación pública y se proceda a la contratación respectiva.

Análisis

Por lo expuesto, es criterio de esta Dirección que procede el pago contra factura del servicio de monitoreo en medios, debido a que es una herramienta indispensable para cumplir las actividades de la Dirección de Comunicación Social y por ende los objetivos del INEC, mientras se realice el proceso de contratación pública, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública precautelando los principios de transparencia, legalidad, trato justo, igualdad y oportunidad, conforme las disposiciones emitidas en el Reglamento General a la LOSNCP y por el SERCOP, el mismo que conforme al procedimiento establecido y el levantamiento de procesos anteriores se lo ejecuta de 30 a 60 días.

Baja de Bienes

La Directora Administrativa Financiera Encargada solicita al señor Director Ejecutivo, autorice la baja de varios activos fijos, que en su parte pertinente manifiesta: "(...) los listados de bienes tanto de Activos Fijos como de Control Administrativo considerados para la baja respectivamente"

Base Legal

- Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público.- (Artículo 11, 12, 13, 79)

Análisis

Mediante memorando No. INEC-DAF-2014-0040-M de 6 de enero de 2014, se solicita al señor Director Ejecutivo la autorización para proceder al trámite respectivo, para dar de baja los bienes institucionales tanto de activos fijos como de control administrativo del INEC que la señora Jefa de Almacén General entrega como anexos como resultado de la constatación física, sin embargo, no se adjunta el informe respectivo determinado en la normativa legal descrita, por lo que dando aplicabilidad, a lo determinado expresamente en los artículos 13 y 79 de la norma legal, es indispensable cumplir los procedimientos establecidos.

Criterio

Con estos antecedentes y amparado en el principio Constitucional de legalidad, considero que, el señor Director Ejecutivo en base a las competencias establecidas en la Ley, debe dar la autorización pertinente para dar inicio al trámite respectivo conforme procedimiento establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración y Bienes del Sector Público

Baja de CD'S

En atención a la sumilla inserta por el Director Ejecutivo Memorando Nro. INEC-CTIMA-DEPCV-2014-0019-M, me permito emitir el siguiente criterio jurídico:

Base Legal

- Constitución de la República (artículos 66 numeral 25, 225, 226, 227)
- Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público (artículos 13, 79, 80)

Análisis

De lo manifestado tanto en los antecedentes como en la normativa jurídica citada, se desprende que los bienes de las Instituciones Públicas que resulten inservibles, obsoletos o hubieren dejado de usarse pueden darse de baja, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. En el presente caso, los CD's que contienen el "Modulo de Manejo Integral de la información Censal se tornaron inservibles y tampoco son susceptibles de donación, tal como se colige en lo descrito en Memorando Nro. INEC-DICOS-2013-0316-M de fecha 27 de mayo de 2013 suscrito por la Directora de Comunicación Social.

Criterio

Del análisis jurídico precedente, es criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica, que es viable que se de inicio a los procedimientos establecidos en Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, para lo cual la Coordinación General Administrativa, deberá encaminar el trámite respectivo para dar de baja los bienes materia de la presente consulta "CD's que contienen el "Modulo de Manejo Integral de la información Censal".

Suscripción Convenios Zonal

El señor Coordinador Zonal Sur, Encargado, solicita un criterio para establecer si existe algún otro documento que respalde la suscripción del contrato en la Coordinación Zonal 6 o en su defecto, si sería el señor Director Ejecutivo el llamado a firmar dicho instrumento, al respecto me permito referirme en los siguientes términos:

Base Legal

- Constitución de la República (Artículo 225, 226, 229 numeral 1)
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (artículo 77)
- Ley de Modernización (artículo 35)
- Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (artículo 54, 55, 56, 57)
- Ley Orgánica de Servicio Público (artículo 6 inciso 4)
- Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos INEC (artículo 3, 11)
- Resolución No. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014 (artículo 1 numeral 4)

Análisis

De lo manifestado tanto en los antecedentes como en la normativa jurídica citada se desprende que el Director Ejecutivo del INEC basado en los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación, transparencia, evaluación, desconcentración, mediante Resolución Nro. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014, de 21 de abril de 2014, delega a los servidores y servidoras del INEC "la Autorización, Expedición y Firma de Actos Administrativos, Actos de Simple Administración y Documentos Oficiales que se Requieran para el Normal Desarrollo de la Gestión Administrativa del Instituto Nacional de Estadística y Censos", y que en su artículo 1 numeral 4, delega al Subdirector General: "La suscripción de convenios interinstitucionales." Cabe aclarar que de conformidad con el artículo 60 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en concordancia con el artículo 12 de la aludida Resolución Nro. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014, el Director Ejecutivo puede hacer uso de todas las atribuciones contempladas en la Ley

Criterio

Del análisis jurídico que precede, es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que para la suscripción de los convenios interinstitucionales, se debe observar la Resolución Nro. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014, de 21 de abril de 2014, que por delegación corresponde al señor Subdirector General.

Beneficios por Jubilación Invalidez

Solicita a esta Dirección, criterio jurídico referente a lo solicitado por la Coordinadora Zonal Litoral 8, Subrogante, sobre la pertinencia para reconocer en las liquidaciones los beneficios por jubilación de los ex servidores Sr. Luis Murillo y de la Sra. Shirley Villacís, tengo que indicar a usted lo siguiente:

Base Legal

- Constitución de la República (Artículo 3, 33, 34,66)
- Ley Orgánica de Servicio Público (artículo 128, 129)
- Reglamento Ley Orgánica de Servicio Público (artículo 285, 288)
- Ley de Seguridad Social (3, 9, 157, 186, 202, 216, 218)
- Reglamento régimen de Transición Seguro, Vejez y Muerte (artículo 4, 5, 7)

Análisis

De lo manifestado tanto en los antecedentes como en la normativa jurídica citada se colige que la Constitución de la República dispone las garantías básicas y necesarias para las personas que desean **acogerse** a la jubilación cuando hayan cumplido los requisitos exigidos por la Ley. De esta manera la persona que desea jubilarse debe cumplir con lo establecido en el artículo 56 de la LOSEP y 285 del Reglamento General a dicha Ley, esto es, contar con la aprobación por parte del Ministerio de Relaciones Laborales de la planificación anual de los servidores a jubilarse y el dictamen presupuestario favorable del Ministerio de Finanzas, situación que en el presente caso no ha ocurrido. Por otro lado conforme las normas invocadas la o el servidor público que acredite la jubilación por invalidez reconocida de conformidad con las leyes de seguridad social, podrá presentar su solicitud y será cancelada durante el ejercicio económico en que fuere calificada dicha invalidez por la respectiva institución de seguridad social. Esto quiere decir que corresponde al IESS cancelar los correspondientes beneficios a que tuviere lugar el jubilado por invalidez y no a la Institución Pública en la que prestó sus servicios.

Criterio

Del análisis jurídico que precede, es criterio de esta Dirección de Asesoría Jurídica, que los beneficios de los servidores que fueron jubilados por invalidez permanente, no corresponde reconocer a la Institución en la cual prestaron sus servicios sino al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución CD 100 emitida por el IESS.

Pago Deducible Siniestro Vehículo

En atención al Memorando Nro. INEC-CGA-2014-1397-M de 11 de septiembre de 2014, en el cual solicita amplíe el criterio jurídico en el que responda concretamente sobre los tres puntos, referente a la autorización del pago del deducible del siniestro del vehículo PE1754, conducido por el señor Milton De La Cruz, chofer de la institución, manifiesto a usted lo siguiente:

Análisis

Según obra del corto informe presentado por el señor Milton de la Cruz, de 23 de julio de 2014, que textualmente dice: *“(...) me encontraba retornando de la comisión realizada a la ciudad de Guamote-Chimborazo hacia Quito, junto a la Ing. María José Murgueitio; siendo las 17h10 aproximadamente y encontrándome en la vía Simón Bolívar fui impactado por un objeto que salió desprendido de un auto que iba delante de nosotros en cual golpeó en el capot y en el parabrisas de mi camioneta produciéndose un hundimiento y fisuras en las partes mencionadas respectivamente. Para constancia de los hechos ocurridos, firman el presente la jefa de la Comisión, Ing. María José Murgueitio y mi persona”*. (las cursivas y subrayado es de la Dirección Jurídica), se desprende que aparentemente el vehículo conducido por el mencionado señor sufrió un percance o siniestro debido a las circunstancias que en dicho informe se explica; estos hechos se presumen (*“Se llama presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas”*) cometidos por el conductor, mientras no se pruebe lo contrario, pues, para corroborar las afirmaciones realizadas por el conductor o para demostrar lo contrario se necesita de medios que permitan a la Administración formarse de un criterio que lo lleven al convencimiento absoluto de dichas afirmaciones, tal como lo dispone el Código de Procedimiento Civil, a más de las normas invocadas en los criterios jurídicos constantes en el memorando INEC-DIJU-2014-0580-M, de 06 de agosto de 2014 y memorando Nro. INEC-DIJU-2014-0637-M.

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA:

Si bien es cierto, que el artículo 91 del Reglamento General de Bienes del Sector Público, se refiere a los bienes que van ser dados de baja por desaparición o destrucción, sin embargo la declaración juramentada a que se refiere dicho artículo es un medio de prueba que no puede dejar de ser tomado en cuenta, pues, en ella se revela la intencionalidad del conductor de referirse a los hechos reales y verdaderos

que ocurrieron al momento del incidente y de esta forma ratificarse en su informe. Recordemos que el instrumento en el cual se declara bajo juramento conlleva, de no ser cierto lo que se declara, repercusiones jurídicas graves como es el delito de perjurio establecido en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, y ninguna persona que no este seguro y apegado a la verdad, puede realizarla en la forma como lo ha hecho el conductor. Además conforme lo determina el inciso tercero del artículo 32 del Código Civil: *“Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias”*. Hecho que ha sido probado por el conductor su no responsabilidad por negligencia o impericia. Además, el conductor al momento del hecho, no se encontraba solo, pues, se encontraba acompañado de una servidora del INEC que tiene un nivel jerárquico superior, y por tal le obliga a decir absolutamente la verdad, es decir, existió un testigo que corrobora que el hecho se produjo como lo relata el conductor del vehículo, lo cual revela y ratifica de forma concordante y unívoca el informe de 23 de julio de 2014.

Cabe señalar que el criterio jurídico contenido en el memorando Nro. INEC-DIJU-2014-0637-M, de 10 de septiembre de 2014, también se explica por qué la aplicabilidad del artículo 91 del Reglamento General de Bienes del Sector Público.

RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA:

El artículo 2 Reglamento General de Bienes del Sector Público, establece que: *“Este reglamento rige para los servidores públicos, sean estos: dignatarios elegidos por votación popular, funcionarios, empleados o trabajadores contratados por autoridad competente, que presten sus servicios en el sector público y para las personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Contraloría, en lo que fuere aplicable”* (Las cursivas y subrayados nos pertenece), en concordancia con el artículo 3 ibídem dice: *Es obligación de la máxima autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos adquiridos o asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad a cualquier título: custodia, préstamo de uso u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento disposiciones que dicte la Contraloría General y el propio organismo o entidad (...)*”

La fuerza mayor o caso fortuito y los elementos para que sea considerado como tal, se encuentra establecida en la Ley, por consiguiente la autorización corresponde a la máxima autoridad o su delegado, enfatizando que de acuerdo al artículo 60 del ERJAFE en concordancia con el artículo 12 de la Resolución No. 025-DIREJ-DIJU-NI-2014 de 21 de abril de 2014, el Director Ejecutivo puede hacer uso de todas las atribuciones delegadas y las que se encuentran establecidas en la Ley.

RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA:

Cabe mencionar a más de lo indicado líneas precedentes y en los criterios jurídicos emitidos, el conductor debiera cancelar el deducible cuando se compruebe su responsabilidad y como consecuencia de su imprevisión en el cuidado del vehículo haya ocasionado el accidente o siniestro, pero de los documentos que obran en el presente caso, no se colige que la responsabilidad sea atribuible al conductor, pues, deviene de fuerza mayor y caso fortuito, por lo tanto, al no ser responsabilidad del conductor correspondería correr con el deducible al propietario del vehículo, es decir, al Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por lo expuesto, esta Dirección se ratifica en los criterios jurídicos constantes en el memorando INEC-DIJU-2014-0580-M de 06 de agosto de 2014 y memorando Nro. INEC-DIJU-2014-0637-M. Cabe mencionar, que es necesario tener una política administrativa que regule estos eventos para lo cual remito proyecto respectivo

RESOLUCIONES INTERNAS

Para que una institución cumpla sus objetivos para los cuales fue creada y contribuya con la sociedad, a más de la observancia de las normas creadas por el legislador, es necesario que su quehacer se apoye en las normas internas que impulsen y favorezcan la consecución continua de sus objetivos sociales y nacionales, en este sentido, el INEC aprueba las siguientes Resoluciones de acuerdo a las necesidades Institucionales y rige con carácter obligatorio para todos los servidores del INEC

Resoluciones 2013

- **Resolución No. 01-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reintegro a la Dirección Zonal 1 Norte de las unidades de Apoyo y operativas.
- **Resolución No. 03-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fondo a Rendir Cuentas de la Encuesta ENEMDU-2013
- **Resolución No. 04-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidación de Partidas presupuestarias DICEN
- **Resolución No. 06-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferir el portafolio de productos de DATH a DAF
- **Resolución No. 07-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Derogar la Resolución No. 11-DIREJ-DIJU-NI-2012.- Transfiere el portafolio a DILIT.- retornar el portafolio de productos y servicios a DATH.

- **Resolución No. 08-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manual de Archivo General y Gestión Documental.
- **Resolución No. 09-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Políticas Institucionales buenas prácticas ambientales
- **Resolución No. 10-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manejo del Fondo a Rendir Cuentas primer Adendum Lineamiento General Proyecto Censo Ambiental Económica GAD.
- **Resolución No. 11-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manejo del Fondo a Rendir Cuentas primer Adendum Lineamiento del Sistema Estadísticas Ambientales
- **Resolución No. 12-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reglamento Valoración Publicaciones y Fotocopias de Cartografía Estadística
- **Resolución No. 13-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Creación de usuarios y administradores de catastros en el Portal de Compras Públicas.
- **Resolución No. 14-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manual de procedimientos Administrativos del INEC.
- **Resolución No. 15-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reforma el Artículo 2 de la Resolución No. 10-DIREJ-DIJU-NI, de 29 de abril de 2013
- **Resolución No. 16-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reglamento para el pago de horas extraordinarias para servidores y trabajadores del INEC.
- **Resolución No. 17-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia de portafolio de DATH a DIPLA
- **Resolución No. 19-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia de portafolio de Santo Domingo a DILIT
- **Resolución No. 20-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia de portafolio de El Oro a DISUR.
- **Resolución No. 21-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia de portafolio de Bolívar a DILIT
- **Resolución No. 22-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reglamento de delegaciones para Autorización y Firma de Documentos Oficiales del INEC.- Derogada
- **Resolución No. 23-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fe de erratas de la resolución No. 13-DIREJ-DIJU-NI-2013.

- **Resolución No. 24-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidación del Proyecto ENENDU
- **Resolución No. 25-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia gratuita de los bienes: proyectores al Ministerio de Educación.
- **Resolución No. 26-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidación del Portafolio PAC-2013
- **Resolución No. 27-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Comisión Especial de Salud Sexual y Salud Reproductiva.
- **Resolución No. 29-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manual de Control Administrativo del INEC
- **Resolución No. 33-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fondo a Rendir Cuentas ESPAC.
- **Resolución No. 34-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Instructivo para el Manejo y Difusión de la información Estadística Oficial.
- **Resolución No. 35-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fondo a Rendir Cuentas ECV.
- **Resolución No. 36-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidar partida presupuestaria empresa AREOMAPA
- **Resolución No. 37-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidar partida presupuestaria empresa INGELSI
- **Resolución No. 38-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidar partida presupuestaria empresa ECOPUSA.
- **Resolución No. 39-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fondo a Rendir Cuentas “Generación de la información Cantón San Miguel de Uruqui (YACHAY)
- **Resolución No. 40-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Convalidación de partidas compras públicas.
- **Resolución No. 41-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fijar el valor diario que recibirá el personal contratado sin relación de dependencia
- **Resolución No. 42-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reformas a la Resolución No. 39-DIREJ-DIJU-NI-2013 YACHAY
- **Resolución No. 43-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Fondo a rendir cuentas: Nacimiento y defunciones 2013

- **Resolución No. 45-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Administradores de los contratos en el Sistema de Compras Públicas
- **Resolución No. 46-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manual de Robo y/o Hurto
- **Resolución No. 47-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Manual de Redacción y Estilos INEC
- **Resolución No. 49-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Reforma Administradores de Contratos
- **Resolución No. 50-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia Gratuita de bienes a la dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha
- **Resolución No. 51-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Programa Nacional de Estadística
- **Resolución No. 52-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Transferencia Gratuita bienes muebles a la Fundación Niños con futuro
- **Resolución No. 53-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Norma Técnica Administrativa de Convenios Acuerdos y Notas Reversarles del INEC
- **Resolución No. 54-DIREJ-DIJU-NI-2013.-** Estatuto Orgánico por Procesos del INEC

Resoluciones 2014

- **Resolución No. 02-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Cerrar el funcionamiento de la Comisión Especial Interinstitucional de Tecnología, Innovación y Sociedad de la Información.
- **Resolución No. 03-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del Proyecto Índice de Precio al Consumidor IPC – Índice de Brechas de la Intermediación IBRE-I.
- **Resolución No. 04-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto Encuesta de condiciones de vida ECV-2012-2015- Sexta Ronda
- **Resolución No. 05-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto Encuesta de empleo, desempleo, subempleo-ENEMDU.
- **Resolución No. 06-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto Censo de información ambiental económica en GAD'S.

- **Resolución No. 07-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto Encuesta de información ambiental económica de empresas.
- **Resolución No. 08-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto ESPAC.
- **Resolución No. 09-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Fondo Rotativo del IPC 2014 SIP 2014.
- **Resolución No. 10-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Fondo Rotativo del IPC para las Coordinaciones Zonales.
- **Resolución No. 11-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto Encuesta de condiciones de vida ECV-2012-2015- Sexta Ronda
- **Resolución No. 12-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma Instructivo para el Manejo del fondo a rendir cuentas del Lineamiento General del proyecto Encuesta de empleo, desempleo, subempleo-ENEMDU.
- **Resolución No. 13-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Delegar a la Directora Zonal Litoral del Instituto Nacional de Estadística y Censos para que suscriba el Acta entrega Recepción del inmueble ubicado en el tercer piso del Edificio Ex Banco del Azuay.
- **Resolución No. 14-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo para el Manejo del Fondo a Rendir Cuentas del Lineamiento General del Proyecto Actualización cartográfica estadística 2010 del INEC.
- **Resolución No. 18-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Determinar la cobertura de los procesos Desconcentrados del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- **Resolución No. 19-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Implementación del Esquema gubernamental de seguridad de la información EGSI del INEC.
- **Resolución No. 20-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Codificación mediante Siglas a cada uno de los procesos Gobernantes, Agregadores de Valor, Habilitantes de Asesoría y Habilitantes de Apoyo y Desconcentrados.
- **Resolución No. 21-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma Fondo a Rendir Cuentas Lineamiento General del Proyecto Encuesta de Condiciones de Vida ECV-2012-2015 Sexta Ronda.
- **Resolución No. 22-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Delegación Dr. Zanafria en Calidad de Coordinador General Administrativo.

- **Resolución No. 23-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reformar Fondo a Rendir Cuentas Actualización Cartográfica Estadística 2010 del INEC.
- **Resolución No. 24-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma al Instructivo para el manejo del fondo a rendir cuentas del lineamiento general del proyecto encuesta de condiciones de vida ecv-2012-2015 sexta ronda.
- **Resolución No. 25-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Delegar la autorización, y firma de actos administrativos.
- **Resolución No. 26-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Baja las especies valoradas, mantenidas en las bodegas Institucionales del INEC
- **Resolución No. 27-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reformar el Instructivo para el Manejo y Difusión de la Información Estadística Oficial.
- **Resolución No. 28-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Cierre funcionamiento de la Comisión especial Interinstitucional de Estadística de la Salud Sexual y Salud Reproductiva.
- **Resolución No. 30-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Liquidar los proyectos del INEC a nivel nacional.
- **Resolución No. 31-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reformar el instructivo para el manejo del fondo a rendir cuentas del lineamiento general del proyecto “censo de información ambiental económica en gobiernos autónomos descentralizados (GAD’S) en el Ecuador 2013”
- **Resolución No. 32-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reformar el instructivo para el manejo del fondo a rendir cuentas del lineamiento general del proyecto “encuesta de información ambiental económica en empresas
- **Resolución No. 33-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Crear Comité para el Proyecto Fortalecimiento y Optimización Institucional.
- **Resolución No. 34-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Dejar sin efecto la Disposición Transitoria Cuarta de la Resolución No. 18 DIREJ-DIJU-NI-2014 de 14 de marzo de 2014.
- **Resolución No. 35-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reglamento para el manejo, administración y reposición del Fondo de Caja Chica
- **Resolución No. 36-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Destinar 20 ejemplares IPC, IPCO, IPI-IVI, IPI-IER, IPP a la biblioteca de Administración Central.

- **Resolución No. 37-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Ejemplares IPI, Índice de Volumen Industrial
- **Resolución No. 38-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Ejemplares IPI, Índice de Empleo, remuneraciones y Horas trabajadas.
- **Resolución No. 39-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Ejemplares Boletín Índice de precios al Consumidor.
- **Resolución No. 40-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Ejemplares Boletín índice Precios de la Construcción IPCO.
- **Resolución No. 41-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Ejemplares Boletín índice Precios de la Construcción IPCO
- **Resolución No. 42-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Ejemplares Boletín índice Precios al Productor Nacional-Exportación IPP 2014.
- **Resolución No. 43-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Convalidar las partidas presupuestarias y certificaciones presupuestarias de los contratos suscritos por el INEC.
- **Resolución No. 44-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Traspasar el vehículo de propiedad de la Oficina Matriz del Instituto Nacional de Estadística y Censos a la Coordinación Zonal Centro 2. (Derogada)
- **Resolución No. 45-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Homologar los nombres de las Coordinaciones Zonales del INEC a nivel nacional, de conformidad con el acuerdo Ministerial 313, emitido por el Ministerio de Finanzas, publicado en el Registro Oficial 108 de 24 octubre 2013. (Derogada)
- **Resolución No. 46-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Primer Adendum Lineamiento EDEMDU
- **Resolución No. 47-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Transferencia gratuita de motocicleta al Ministerio de Educación
- **Resolución No. 48-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Homologación nombres Coordinaciones Zonales del INEC a nivel nacional.
- **Resolución No. 49-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Traspaso el vehículo de propiedad de la Oficina Matriz del INEC a la Coordinación Zonal 3 – INEC.
- **Resolución No. 50-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma Resolución 166-DIRG-2008 y deroga resolución 178-2010.

- **Resolución No. 51-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma Resolución No. 46-2014, Primer Adendum EDEMDU
- **Resolución No. 52-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reglamento Interno DATH para servidores INEC
- **Resolución No. 53-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Traspaso de vehículos a la Coordinación Zonal 8 – INEC y Coordinación Zonal 9 – INEC.
- **Resolución No. 54-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Transferencia de dominio de Inmobiliar al INEC.
- **Resolución No. 55-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Protocolo para la Elaboración, Aprobación y Difusión de Investigaciones Científicas del INEC
- **Resolución No. 56-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Protocolo de Solicitud y Entrega de Información de la Coordinación General Técnica de Producción Estadística- CGTPE
- **Resolución No. 55-A-DIREJ-2014 hasta Resolución No. 82-DIREJ-2014.-** Resoluciones de Dirección de Comunicación Social.
- **Resolución No. 83-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Reforma al Reglamento para el Manejo, Administración y Reposición de caja chica
- **Resolución No. 84-DIREJ-DIJU-NI-2014.-** Instructivo de Manejo Documental Quipux.

Normas Técnicas

- **Resolución No. 01-DIREJ-DIJU-NT-2014.-** Norma Técnica para el Uso de las Clasificaciones y Nomenclaturas contenidas en el Sistema Integrado de las Clasificaciones.
- **Resolución No. 002-DIREJ-DIJU-NT-2014.-** Reglamento General para la Creación, Funcionamiento y Cierre de las Comisiones Especiales de Estadística.
- **Resolución No. 003-DIREJ-DIJU-NT-2014.-** Código de Buenas Prácticas Estadísticas.
- **Resolución No. 004-DIREJ-DIJU-NT-2014.-** Norma Técnica para la Producción de Estadística Básica.
- **Resolución No. 005-DIREJ-DIJU-NT-2014.-** Norma Técnica del Sistema de Certificación de la Calidad de las Operaciones Estadísticas.

LEGISLACIÓN ECUATORIANA

Los países a nivel mundial para que impere el orden, la igualdad, la no discriminación, la justicia, la paz social, entre otros principios, son regidos por su propia legislación, la cual coadyuva a conseguir los objetivos de todos los individuos de una nación, es así que, en nuestro país existe abundante legislación que persigue los mismos objetivos de bienestar y progreso, pero es necesario destacar las principales normas que tienen relación con el Instituto Nacional de Estadística y Censos

Constitución Política de la República.- Registro Oficial 449 de 20 octubre 2008.- En esta norma se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la vida del país.

Ley Orgánica de Servicio Público.- Registro Oficial Suplemento 294 de 06 octubre de 2010.- Esta Ley sustituye a la Ley Orgánica de servicio Civil y Carrera Administrativa y busca que la organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad

Reglamento General Ley Orgánica de Servicio Público.- Decreto Ejecutivo 710, Registro Oficial Suplemento 418 de 01 abril 2011.- Se expide con la necesidad de contar con una reglamentación clara y específica sobre la carrera administrativa, la administración del talento humano, el sistema de remuneraciones e ingresos complementarios, y la gestión y desarrollo institucional que mantendrán las instituciones, entidades, organismos y personas jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público

Estatuto del régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.- Decreto Ejecutivo 2428 Registro Oficial 536 de 18 marzo 2002.- establece principalmente la estructura general, el funcionamiento, el procedimiento administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la Administración Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva.

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Registro Oficial Suplemento 337 de 18 mayo de 2004.- Establece como necesidad hacer efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su naturaleza sean de interés público. Establece además la prohibición de entrega de información que sea considerada reservada o confidencial cuando así la ley lo establezca.

Ley de Estadística.- Decreto Supremo 323 Registro Oficial 82 de 07-may-1976, mediante esta Ley el INEC se constituye en el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, siendo responsable de normar, planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades Estadísticas en el país

Decreto Ejecutivo Nro. 77.- Registro Oficial Nro. 81, 16 de septiembre de 2013.- el Señor Presidente Constitucional de la República, dispuso la Reorganización del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Reglamento General Sustitutivo de Bienes Del Sector Público.- Se aplica para la gestión de los bienes de propiedad de los organismos y entidades del sector público comprendidos en el Art. 225 de la Constitución Política de la República.

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.- La estructura organizacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo a su objetivo estratégico, se encuentra alineada con la misión, facultades y atribuciones determinadas por la Ley de Estadística y el Decreto Ejecutivo No. 077 de reorganización y fortalecimiento institucional.

REFORMAS RELEVANTES EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

[Decreto N° 149](#)
[Presidencia de la República](#)

Registro Oficial Nro. 146, 18 de Diciembre de 2013.- Dispone la implementación del gobierno electrónico en la Administración Pública Central, Institucional y que depende de la Función Ejecutiva.- La implementación del gobierno electrónico en la Administración Pública Central, Institucional y que depende de la Función Ejecutiva, que consiste en el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de las entidades para transformar las relaciones con los ciudadanos, entre entidades de gobierno y empresas privadas a fin de mejorar la calidad de los servicios gubernamentales a los ciudadanos, promover la interacción con las empresas privadas, fortalecer la participación ciudadana a través del acceso a la información y servicios gubernamentales eficientes y eficaces y coadyuvar con la transparencia, participación y colaboración ciudadana.

[Decreto Nro. 338](#)
[Presidencia de la República](#)

Registro Oficial I Suplemento Nro. 263, 9 de junio de 2014.- Reforma el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.- Sustituye el texto de la letra h) del Artículo 10.1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, por el siguiente:“h) Servicio.- Organismo público encargado de la

administración y provisión de bienes y/o servicios destinados a la ciudadanía y a la Administración Pública Central e Institucional, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera. Contará con una instancia colegiada como máximo nivel gobernante desde el cual se ejercerá la rectoría en el ámbito de sus competencias.”; Sustituye las denominaciones del “Instituto Ecuatoriano de Normalización” por “Servicio Ecuatoriano de Normalización” y la de “Organismo de Acreditación Ecuatoriana” por “Servicio de Acreditación Ecuatoriana”.

[Código Orgánico Monetario y Financiero.](#)

Registro Oficial Nro. 332 de viernes 12 de septiembre de 2014.- La disposición Décima séptima establece el intercambio de infamación: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, podrán intercambiar sin restricción alguna la información que posean, y que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. La información personal es reservada y no perderá tal condición por el intercambio con otras instituciones del Estado, a quienes se les trasladará dicha reserva”.

[Acuerdo Ministerial MRL-2014-165.](#)
[Ministerio de Relaciones Laborales](#)

Registro Oficial Nro. 326 Segundo Suplemento de 04 de septiembre de 2014.- Expide la Norma Técnica para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para los y los servidores y las y los Obreros en las Instituciones del Estado.

[Acuerdo Ministerial MRL-2014-161](#)
[Ministerio de Relaciones Laborales](#)

Registro Oficial Nro. 331 de 11 de septiembre de 2014.- Establece los techos de negociación para la suscripción de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales.

[Resolución 045-CG-2014](#)
[Contraloría General del Estado](#)

Registro Oficial Nro. 335 - 17 de septiembre de 2014.- Expide el Instructivo para la Programación y Ejecución de Operativos de Control de Vehículos Oficiales.

[Resolución NAC-DGERCGC14-00749](#)
[Servicio de Rentas Internas:](#)

Registro Oficial Nro. 338 Segundo Suplemento, 22 de Septiembre de 2014.- Crea y regula el Sistema de Identificación, Marcación y Rastreo -SIMAR- 12: Este sistema consiste en una plataforma integral que contendrá información respecto a la producción, comercialización y aspectos de interés tributario, de bienes de producción nacional gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales, y operará a través de la colocación y activación de componentes físicos y tecnológicos de seguridad en cada producto.

[Decreto Nro. 449](#)
[Presidencia de la República](#)

Registro Oficial Nro. 343 - 29 de septiembre de 2014.- Expide varias reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.- Reforma los artículos 18, 180, 181, 183, y 187

[Acuerdo Ministerial N°. 0030-201](#)
[Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda](#)

Registro Oficial No. 345 01 de octubre de 2014.- Reglamento Operativo del Sistema de Apoyos Económicos para el Programa Nacional de Vivienda Social SAV-BID.- Como parte de las condiciones particulares de elegibilidad de viviendas y terrenos para el ámbito urbano y rural se establecen como referencias las proyecciones de población (número de habitantes) realizadas por el INEC respecto a las parroquias rurales.

[Acuerdo Ministerial N°. 0174](#)
[Ministerio de Finanzas](#)

Registro Oficial No. 346 02 de octubre de 2014.- Normas técnicas para el sistema de liquidación y extinción de obligaciones entre entidades del sector público.- El Sistema de Liquidación y Extinción de Obligaciones entre Entidades del Sector Público, es un mecanismo de cancelación de deudas, que permite extinguir las deudas entre dos o más entidades públicas o el Estado representado por el Ministerio de Finanzas con otras entidades, que se originen por transacciones efectuadas entre las mismas; por la compraventa de bienes y prestación de servicios entre las entidades del sector público; por haberse efectuado el pago; por haber operado la compensación; por condonación de la deuda; y, por la recuperación de las subrogaciones de deuda pública efectuadas por el Estado ecuatoriano cuantificados en moneda de circulación oficial.

[Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787](#)
[Servicio de Rentas Internas](#)

Registro Oficial Tercer Suplemento No. 346 02 de octubre de 2014.- Expedir los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta.- **Art. 2.-** Se establecen los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta por los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: **2%:** a) Servicios prestados por personas naturales, en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual; **8%:** a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste; **10%:** a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales residentes en el país que presten servicios profesionales en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.

Normativa a considerar especialmente para la acreditación de los pagos de honorarios al personal civil de proyectos.

[Acuerdo Ministerial MRL-2014-194.](#)
[Ministerio de Relaciones Laborales](#)

Registro Oficial Nro. 356 Tercer Suplemento de 17 de octubre de 2014.- Reforma la Norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

[Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0188](#)
[Ministerio de Relaciones Laborales](#)

Registro Oficial Segundo Suplemento No. 351 09 de octubre de 2014.- Reformar la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos.- “Se reforma el subfactor de años de experiencia para la aplicación para la asignación de puntaje” “Las instituciones públicas que cuenten con los manuales de clasificación de puestos legalmente aprobados por el MRL, realizarán los ajustes necesarios sin requerir informe previo del MRL”.

Norma aplicable para la Dirección de Administración de Talento Humano al momento de elaborar o reformar el Manual de Clasificación de Puestos institucional

[Decreto Ejecutivo No. 465](#)

Registro Oficial Suplemento No. 357 20 de Octubre de 2014.- Inmediata suspensión de la aplicación y ejecución del acuerdo ministerial No. MRL-2012-0094 de 5 de junio de 2012 y su reforma.- Suspende la aplicación y ejecución de los Acuerdos Ministeriales MRL-2012-0094 y MRL-2013-0137 (Remuneración Variable por

Eficiencia para servidores del NJS), y Dispone la devolución de los valores percibidos al amparo de los acuerdos suspendidos.

[Acuerdo MRL-2014-0192](#)

Ministerio de Relaciones Laborales

Registro Oficial Nro. 358 21 de octubre de 2014.- Emite el Reglamento para el Registro de Trabajo y Actas de Finiquito.- Tiene por objeto establecer el procedimiento para el registro de los contratos de trabajo y de las actas de finiquito por terminación de la relación laboral, que se lo realizará a través de la página web del ministerio de Relaciones Laborales, www.relacioneslaborales.gob.ec

CONSULTAS PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

CONTRATACIÓN DIRECTA: DECLARATORIA DE EMERGENCIA

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN ARAJUNO

CONSULTA:

“Es procedente que en mi calidad de Alcalde del Cantón Arajuno pueda contratar en forma directa la obra Alcantarillado Sanitario y Pluvial, considerando que la Declaratoria de Emergencia Sanitaria la dicté el 14 de agosto del 2009 y que a la presente fecha se encuentra en vigencia, obra que es necesaria para erradicar los medios infecciosos y la contaminación de las aguas que están causando una epidemia en la comunidad de Arajuno por así determinarlo los informes de la Dirección de Salud de Pastaza y Subcentro de Salud de Arajuno”.

PRONUNCIAMIENTO:

La declaratoria de emergencia de la obra de alcantarillado sanitario y pluvial, es atribución y responsabilidad del Municipio de Arajuno, en virtud de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley Orgánica de Contratación Pública.

En consecuencia, esta Procuraduría no se pronuncia sobre la motivación y los procedimientos efectuados por la Municipalidad a su cargo, para la declaratoria de emergencia, ni para la celebración y el contenido de los contratos señalados, siendo de competencia de la Contraloría General del Estado de conformidad con los artículos 19 y 31 numerales 1 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, realizar exámenes especiales de las entidades sujetas a su control, con posterioridad a su ejecución, y de ser el

caso establecer responsabilidades individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones legales cuando fueren del caso.

CONTRATO: AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, CONTRATO MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN UNILATERAL

CONSULTANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

CONSULTAS:

- 1.- “¿En los contratos de ejecución de obra, es legalmente obligatoria una amortización del anticipo dentro de un lapso máximo de un año de otorgado?”
- 2.- “¿En circunstancias de haberse producido un error de buena fe, en la estipulación atinente a la amortización del anticipo, es indispensable la celebración de un contrato modificatorio?”.
- 3.- “¿En caso de negativa de la contratista a la celebración de un contrato modificatorio, en el caso específico supra indicado, esta constituye incumplimiento de obligaciones y da lugar a la terminación unilateral del contrato?”.
- 4.- “¿En el caso específico supra indicado y descrito, se inteligencia la validez del numeral 7.04 de la cláusula séptima, y por consiguiente del contrato, de modo que los términos contractuales determinan una amortización dentro del lapso máximo de un año de otorgado el anticipo; y, en tal circunstancia, existiendo un vacío en la ley del contrato respecto a los términos particulares de amortización, está obligada la contratista a aceptar una amortización dentro del lapso máximo de un año de otorgado el anticipo?”
- 5.- “¿O, en el caso específico antes indicado y descrito, es procedente amortizar el anticipo en base a la proporción existente entre el anticipo entregado y el monto acumulado de inversión ofertado en el mes doce del cronograma vigente, esto es, descontar aproximadamente los dos tercios de las planillas y pagar el tercio restante, dando la posibilidad de que siempre tenga el contratista un flujo de caja adecuado?”.
- 6.- “¿En caso de existir nulidad, esta es absoluta o relativa?”.
- 7.- “¿De existir nulidad, que procedimiento legal debe aplicarse en función del interés público y el principio de legalidad?”.

PRONUNCIAMIENTOS:

1.- Según la cláusula séptima del contrato, se entregó en calidad de anticipo al contratista, el 30% del valor del contrato, y dicho valor debe ser amortizado efectuándose su descuento en cada planilla de avance, hasta que se produzca su total amortización en el plazo máximo de doce meses contados desde su pago, según el artículo 139 y la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de celebración del contrato.

2.- No existe error de hecho o de cálculo que sin viciar el consentimiento, deba ser corregido mediante un contrato modificatorio, pues la omisión de condiciones particulares para la amortización del anticipo, que pudieron ser incorporadas a los pliegos por la entidad contratante de conformidad con el artículo 28 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se suple por las previsiones del artículo 139 y de la Disposición General Sexta del mismo Reglamento General, que respecto de la forma y plazo para la amortización del anticipo prevén que sea mensual y que se efectúe en el plazo máximo de doce meses desde que el anticipo fue otorgado.

En atención a los términos de su segunda consulta, se concluye que atenta la inexistencia de error en la cláusula que estipula la amortización del anticipo, que en forma expresa se remite a la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley, no es aplicable el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prevé la celebración de contratos modificatorios para enmendar errores de hecho.

4 Y 5.- El Consejo Provincial de Pichincha deberá efectuar los descuentos por concepto de anticipo, de cada planilla de avance, según el artículo 139 del citado Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la cláusula séptima del contrato, numeral 7.03, desde la primera planilla, debiéndose amortizar la totalidad del anticipo pagado, dentro del plazo máximo de un año contado desde que dicho anticipo fue pagado, según la Disposición General Sexta ibídem, y no a partir del mes doce como propone en la quinta consulta.

3, 6 y 7.- Al respecto debo indicarle que sus consultas tercera, sexta y séptima, no están relacionadas con la inteligencia o aplicación de una norma legal, razón por la cual me abstengo de atender las mismas.

CONVENIO DE PAGO: OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR A LA CONTRALORIA Y PROCURADURÍA DEL CONVENIO

CONSULTANTE: MINISTERIO DE TURISMO

CONSULTA:

“¿Procede que el Ministerio de Turismo realice el pago a la compañía Vallejo Iregui Pérez Publicidad Cía. Ltda. a través de la figura de convenio de pago?”.

PRONUNCIAMIENTO:

La Auditoría del Ministerio de Turismo deberá ejercer el control de los procedimientos adoptados con respecto al tema que motiva la consulta que se absuelve con el presente pronunciamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a la Contraloría General del Estado, de conformidad con lo previsto en el número 2 del Art. 212 de la Constitución de la República, así como de los artículos 19 y 31 número 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determinar responsabilidades por las acciones u omisiones de los servidores de esa Secretaría de Estado, con relación a la situación consultada.

El Ministerio de Turismo, para efectos de control posterior, deberá informar a la Procuraduría y a la Contraloría General del Estado de cualquier convenio de pago que se celebre teniendo como antecedente la absolución de esta consulta.

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA: PREVALENCIA DE LA LEY POSTERIOR

CONSULTANTE: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO EMAC EP

CONSULTA:

“¿Al ser actualmente la EMAC EP una Empresa Pública Municipal constituida al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, corresponde a la Gerente de la Empresa o al Alcalde de la ciudad el emitir la resolución para la declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble necesario para el cumplimiento de los fines de la Empresa?”.

PRONUNCIAMIENTO:

En virtud de que la materia sobre la que versa su consulta está regulada por leyes de igual rango, cabe puntualizar que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización fue expedido con posterioridad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y que el COOTAD, en el artículo 447 regula el procedimiento de expropiación de inmuebles por parte de los gobiernos autónomos

descentralizados, ha incluido una norma en la que regula expresamente el caso de expropiaciones requeridas por las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos municipales, disponiendo que éstas deberán solicitar tales expropiaciones a la máxima autoridad ejecutiva correspondiente, es decir al Alcalde, en el caso de una empresa pública municipal.

Por lo expuesto, en atención a su consulta, se concluye que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, al ser la EMAC EP una Empresa Pública Municipal, corresponde a la Gerente de la Empresa solicitar al Alcalde de la ciudad, que emita la resolución para la declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble necesario para el cumplimiento de los fines de la Empresa.

FONDOS DE RESERVA: CONTINUIDAD DE APORTES Y ANTIGÜEDAD PARA EL CÁLCULO

CONSULTANTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PUJILÍ

CONSULTA:

“¿El GAD Municipal puede pagar fondos de reserva a un Servidor Público, conforme lo establece el Art. 269 referente al fondo de reserva, del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, considerando que laboró hasta el mes de septiembre del 2010 en la Dirección de Rehabilitación Social, e ingresó a esta institución el 01 de Octubre del 2010, toda vez que estas dos instituciones son entidades del Estado, existiendo secuencia en los aportes al IESS, de acuerdo a las copias que se anexa, y la continuidad en el trabajo de acuerdo a la ley de Seguridad Social?”.

PRONUNCIAMIENTO:

El Art. 99 de la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone que los servidores de las instituciones y organismos previstos en el Art. 3 de esta ley tienen derecho a recibir anualmente y a partir del segundo año de servicio, por concepto de fondos de reserva una remuneración mensual unificada del servidor equivalente a la que perciba; y que, el Art. 269 del Reglamento General a la LOSEP, prevé que en caso de que un servidor cesare en funciones en una de las instituciones establecidas en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público e ingrese al primer día laborable siguiente a otra institución, entidad u organismo del sector público, no perderá su derecho y antigüedad para el cálculo, provisión y pago del fondo de reserva, se concluye que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pujilí, en caso de que un servidor cesare en funciones en una de las instituciones

establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, e ingresare al primer día laborable siguiente al Municipio a su cargo, no perderá su derecho y antigüedad para el cálculo, provisión y pago del fondo de reserva.

NEPOTISMO: CONSEJERA

CONSULTANTE: CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA

Solicita la reconsideración del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, emitido con el oficio No. 01196 de 1 de abril de 2011, relacionado con la existencia de algún impedimento legal para que el hermano de una consejera pueda ser designado como asesor de la Entidad.

PRONUNCIAMIENTO:

Tanto el órgano legislativo, que es un cuerpo colegiado, como el Prefecto y demás personal del gobierno autónomo descentralizado, conforman el Consejo Provincial, como entidad de derecho público, sujeta a la Ley Orgánica del Servicio Público, por disposición del artículo 3 de dicha Ley Orgánica.

Por lo expuesto con fundamento en la normativa citada, al no haber variado los antecedentes y argumentos jurídicos que sirvieron de base para emitir el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que consta en el oficio No. 01196 de 1 de abril de 2011, lo ratifico en su total contenido.

NEPOTISMO: DOCENTE PROFESIONAL TRIUNFADORA DE CONCURSO

CONSULTANTE: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

CONSULTAS:

1.- ¿Procede o no el otorgamiento del nombramiento en calidad de docente, del profesional triunfador del concurso de merecimiento y oposición, siendo pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad con un miembro del Honorable Consejo Universitario, teniendo presente que lo único que efectúa el HCU, es otorgar el nombramiento?.

2.- ¿Procede o no suscribir el respectivo contrato de docente universitario, con personas que tienen parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con uno de los Miembros del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Cotopaxi, no obstante de que sean declarados triunfadores del respectivo concurso de merecimientos y oposición?.

PRONUNCIAMIENTOS:

1.- El ingreso al sector público tiene que realizarse por el respectivo concurso de merecimientos y oposición el cual también debe estar enmarcado dentro de las disposiciones y prohibiciones establecidas para el ingreso al sector público, entre las cuales se encuentra la prohibición del nepotismo establecida en los artículos 6 de la Ley Orgánica del Servicio Civil, y 6 de su Reglamento de Aplicación.

2.- En aplicación de los fundamentos legales de la contestación a la primera consulta, no procede suscribir un contrato de docente universitario, con personas que tengan grados de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con uno de los Miembros del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de conformidad con la prohibición del inciso segundo del artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que rige para todas las entidades determinadas en el artículo 3 ibídem, al tenor de la Disposición General Tercera de la misma Ley Orgánica del Servicio Público, no obstante de que sean declarados triunfadores del respectivo concurso de merecimientos y oposición.

SUBROGACIÓN: CARGO QUE NO CORRESPONDE A SUPERIOR JERÁRQUICO

CONSULTANTE: COMISIÓN DE TRANSICIÓN CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO CONSULTA:

“Por lo expuesto y de conformidad al criterio jurídico emitido por la Directora Técnica Jurídica de esta entidad con fundamento en los principios y derechos de la Constitución de la República en sus artículos: 11 numeral 5; 33; 66 numeral 4; 229 y en especial el artículo 326 numeral 3, emita su pronunciamiento respecto a la procedencia del pago de subrogación a los/las Servidores/as en el ejercicio de puestos que no correspondan al nivel jerárquico superior”.

PRONUNCIAMIENTO:

Con fundamento en los artículos 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 270 de su Reglamento que es procedente que un servidor público subroge un puesto que no se encuentre en la estructura organizacional del nivel jerárquico superior, siempre que las atribuciones y responsabilidades del puesto que se subroga incorporados en los Manuales de Clasificación de Puestos Genérico e Institucional deban ser cubiertas o asumidas mediante subrogación, a efectos de legalizar y legitimar las actuaciones que efectúe el servidor de menor nivel que cubra el puesto superior, quien además deberá cumplir con los requisitos exigibles para el cargo.

Según ha quedado señalado en líneas anteriores, corresponde a la Unidad de Administración de Talento Humano de la Comisión de Transición – Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, emitir un informe motivado que determine en cada caso la procedencia de la subrogación de puestos que no se encuentren en el nivel jerárquico superior de la estructura organizacional de la entidad y en consecuencia la procedencia del correspondiente pago por subrogación.

SUBROGACIÓN: COMPUTO PARA EL PAGO, ENCARGO

CONSULTANTE: UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL DEL ECUADOR – PROFORESTAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA, MAGAP

CONSULTA:

Si es procedente el pago de los haberes por encargo o subrogación, a varios funcionarios de PROFORESTAL a quienes se les encargó varios puestos directivos de dicha entidad.

PRONUNCIAMIENTO:

Con respecto a los coordinadores provinciales de PROFORESTAL, a los cuales se les encargó varias direcciones provinciales bajo la figura del encargo, antes de la publicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, tomando en consideración que según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de PROFORESTAL, los Directores Provinciales Regionales de PROFORESTAL, son puestos directivos y son jerárquicamente superiores al de los coordinadores provinciales, si los mencionados coordinadores provinciales de PROFORESTAL, se

mantienen en los mismos puestos en calidad de encargados, tienen derecho a percibir la mencionada remuneración por encargo de puestos vacantes, de conformidad con los artículos 127 de la Ley de Servicio Público y 271 de su Reglamento de Aplicación.

En relación a los demás funcionarios a quienes se les encargó varios puestos mediante la figura de la subrogación, antes de la publicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, según se desprende de los memorandos referidos en los antecedentes de la consulta, a partir de la publicación de la LOSEP, si los mencionados funcionarios siguen subrogando en puestos del nivel superior, procede la subrogación a puestos de nivel jerárquico superior independientemente de que se encuentren en la escala de remuneraciones mensuales del nivel jerárquico superior o en la escala de remuneraciones mensuales de los servidores públicos, por lo que tienen derecho a la diferencia de la

remuneración mensual unificada que corresponde al subrogado, durante el tiempo que dure el reemplazo.

Se deberá tener en cuenta para el efecto, que la atribuciones, funciones y responsabilidades de los puestos subrogados, sean de aquellos que necesariamente deben ser cubiertos y asumidos mediante subrogación, y que los servidores cumplan además con los requisitos de los puestos que subrogan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 126 y la LOSEP y 270 de su Reglamento.

Para el efecto, corresponde a la Unidad de Administración de Talento Humano Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador, PROFORESTAL, emitir un informe motivado que determine en cada caso la procedencia de la subrogación de puestos que no se encuentren en el nivel jerárquico superior de la estructura organizacional de la entidad y en consecuencia la procedencia del correspondiente pago por subrogación.

SUBROGACIÓN: JEFATURA FINANCIERA

CONSULTANTE: ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA

CONSULTA:

“¿Corresponde el pago de la diferencia de la remuneración mensual unificada, por subrogación o encargo, a la servidora encargada de la Jefatura Financiera, cuyo titular se encuentre legalmente ausente, (no vacante), cuyo puesto no se encuentra comprendido dentro del nivel jerárquico superior?”.

PRONUNCIAMIENTO:

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público que establece que la subrogación procede cuando un servidor reemplace temporalmente a un superior ubicado en el nivel jerárquico superior y en el artículo 238 del derogado Reglamento a la LOSCCA (vigente a la fecha de la subrogación que motiva esta consulta) que preveía la subrogación a puestos de dirección o jefatura, así como en el artículo 270 del vigente Reglamento a la LOSEP, que prevé que la subrogación incluye “los puestos que dependan administrativamente de la misma institución”, se concluye que la doctora Martha Lozano, Contadora de la Orquesta Sinfónica de Loja, tendría derecho al pago de la diferencia de la remuneración mensual unificada de Jefa Financiera, siempre y cuando las atribuciones y responsabilidades de Jefe Financiero incorporados en los Manuales de Clasificación de Puestos Genérico e Institucional deban ser cubiertas o asumidas mediante subrogación, quien además deberá cumplir con los requisitos exigibles para el cargo de Jefa Financiera.

Según ha quedado señalado en líneas anteriores, corresponde a la Unidad de Administración de Talento Humano de la Orquesta Sinfónica de Loja, emitir un informe motivado que determine la procedencia de la subrogación de puestos que no se encuentren en el nivel jerárquico superior de la estructura organizacional de la entidad y en consecuencia la procedencia del correspondiente pago por subrogación.

SUBROGACIÓN: PUESTOS QUE NO SON DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR

CONSULTANTE: MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

CONSULTAS:

1.- “¿Cuál es el alcance y aplicación del artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público?”.

2.-“¿Es legal y procedente que la Municipalidad pague por subrogación a la servidora o servidor público que subroga un puesto que no se encuentre en la estructura organizacional del nivel jerárquico superior?”.

3.- “¿Es legal que la Municipalidad, pague a una servidora o servidor público por concepto de subrogación por ausencia de su titular cuando este subroga un puesto de libre nombramiento y remoción que no se encuentra en el nivel jerárquico superior de la estructura organizacional de la entidad?”.

PRONUNCIAMIENTO:

Con fundamento en los artículos 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 270 de su Reglamento, se concluye que es procedente que un servidor público subroga un puesto que no se encuentre en la estructura organizacional del nivel jerárquico superior o a un puesto de libre nombramiento y remoción que no se encuentra en el nivel jerárquico superior de la estructura organizacional de la entidad, siempre que las atribuciones y responsabilidades del puesto que se subroga incorporados en los Manuales de Clasificación de Puestos Genérico e Institucional deban ser cubiertas o asumidas mediante subrogación, quien además deberá cumplir con los requisitos exigibles para el cargo.

Según ha quedado señalado en líneas anteriores, corresponde a la Unidad de Administración de Talento Humano del Municipio de San Cristóbal, emitir un informe motivado que determine en cada caso la procedencia de la subrogación de puestos que no se encuentren en el nivel jerárquico superior de la estructura organizacional de la entidad y en consecuencia la procedencia del correspondiente pago por subrogación.

RENUNCIA VOLUNTARIA: CÁLCULO SOBRE LOS AÑOS LABORADOS EN EL SECTOR PÚBLICO

CONSULTANTE: Gerencia General de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRANSSAVE).

CONSULTAS:

1.- "¿Prevalece lo señalado en el inciso segundo del Artículo 285 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público sobre el Artículo 10 del Acuerdo Ministerial No. 158 de 7 de junio de 2011 expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales, y publicado en el Registro Oficial Suplemento 467 del 10 de junio de 2011, en lo referente a que se debe realizar el cálculo sobre todos los años laborados en el sector público y no solo en la última institución en la que presenta la renuncia voluntaria?".

2.- "Al presentar un servidor público la renuncia voluntaria en el quinto año de servicio en la misma institución y al no haber laborado anteriormente en otra institución del sector público, al amparo de lo señalado en el Artículo 285 inciso segundo del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, para el cálculo de la compensación por renuncia voluntaria. ¿Se le deben reconocer los cuatro años y la parte proporcional del quinto año en que presenta la renuncia y es legalmente aceptada?".

PRONUNCIAMIENTOS:

1.- El cálculo de la compensación por renuncia voluntaria se debe efectuar a partir del inicio del quinto año de servicios prestados en la misma institución, conforme prescriben la Disposición General Décimo Segunda de la LOSEP, el artículo 286 del Reglamento a la LOSEP y los artículos 3 y 10 del Acuerdo No. 158 del Ministerio de Relaciones Laborales. Por tanto, no es procedente incluir en el cálculo de la compensación por renuncia voluntaria todos los años laborados por el servidor cesante en el sector público.

2.- Con relación a su segunda consulta se concluye que, si un servidor público presenta su renuncia voluntaria en el quinto año de servicio en la misma institución, para el cálculo de la compensación por renuncia voluntaria, se le debe reconocer el valor proporcional sobre la fracción del quinto año laborado en la misma institución, de conformidad con la base de cálculo establecida en la Disposición General Décimo Segunda de la LOSEP y el artículo 10 del Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales No. 158, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 467 de 10 de junio de 2011.

HISTORIA LABORAL: ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

CONSULTANTE: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta:

“(si la información contenida en el Registro de Historia Laboral cuyo carácter de información reserva ha sido establecido en la Ley de Seguridad Social, puede ser Entregada a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en base a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (...))”

PRONUNCIAMIENTO:

A fin de contar con mayores elementos de análisis sobre el tema materia de consulta, mediante oficio No. 08701 de 6 de julio de 2012, este Organismo requirió el criterio institucional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, lo que fue atendido con oficio No. 000675-DN-DINARDAP-2012 de 20 de julio de 2012, ingresado el 23 de julio del presente año.

El informe jurídico del Procurador General del IESS, contenido en oficio No.64000000-2066 TR69207 de 29 de junio de 2012, que se ha acompañado a la consulta cita, entre otras normas, el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República que reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la protección de datos de carácter personal.

El Procurador Síndico del IESS invoca además, los artículos 244 y 247 de la Ley de Seguridad Social, los cuales determinan la información que se debe incluir en el “Registro de Historia Laboral del Asegurado”, y que la califican como reservada; y, por otra parte, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Registro de Datos Públicos, que ordena a las instituciones del sector público, entre ellas al IESS, a integrarse al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos e interconectarse con dicho Sistema.

Sobre dicha base normativa, el Procurador General del IESS, argumenta que:

“El Art. 247 de la Ley de Seguridad Social establece que la información de la historia laboral del asegurado es reservada, cuyo quebrantamiento de la prohibición de revelar los datos contenidos en ella será sancionado con arreglo al Código Penal. Sin embargo de ello la información podrá darse a conocer de conformidad con la Ley, a los tribunales y jueces competentes, así como a petición del afiliado (...).

Por lo expuesto señor Director, esta Procuraduría General considera, que toda información que no forme parte de la historia laboral o de la historia clínica de los asegurados y esté a cargo del Instituto, si puede ser concedida sin restricción alguna”.

Por su parte, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, en el oficio No. 000675-DN-DINARDAP-2012 de 20 de julio de 2012 al que se hizo referencia en los antecedentes de este pronunciamiento, se refiere al derecho de protección de datos de carácter personal que establece el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República, y expone que:

“Debemos resaltar, que la norma con supremacía jerárquica en nuestro país determina que por mandato de la ley, en este caso la del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, estos datos pueden ser difundidos a través del mismo sistema que crea la esta norma en su artículo primero y que regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, tanto en las entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros; es decir también regula a las bases y registros de datos públicos que mantiene a su cargo el IESS. Esto, con el objeto de garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información propendiendo a lograr la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías (...)”.

Añade que: “Es por demás necesario, resaltar que en el informe jurídico realizado por la Procuraduría General del IESS, se confunde la información pública personal, con el registro de dato público (...)”.

Agrega que:

“La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos expresa en sus artículos 22 y 23 que la DINARDAP se encargará de organizar un sistema de interconexión cruzado entre los registros público y privado que actualmente (como es el caso del IESS) o en el futuro, administren bases de datos públicos, para lo cual creará un sistema informático que tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros (...) lo cual ha sido materializado con la conformación de la Ficha Única de Registros Públicos del Ciudadano, visualizada a través del portal www.datoseguro.gob.ec.

Por tanto, las entidades a las que la ley manda a interconectarse, con la finalidad de prestar servicios eficientes y eficaces para los ciudadanos, no pueden ser ajenas a este proceso, ya que la falta de información verás podría devenir en que el ciudadano no goce en su plenitud de sus derechos constitucionales”.

Respecto del registro de historia laboral del asegurado en el IESS, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, manifiesta que dicha información “es de propiedad del ciudadano y un registro de dato público por esencia y el IESS la entidad de registro y por ende el custodio de esta”.

Concluye el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, manifestando lo siguiente:

“Por las exposiciones jurídicas y legales expuestas en el presente y con la finalidad de coadyuvar con la entidad a su cargo para el cabal cumplimiento de la Constitución de la República y la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, me permito exhortar a usted a fin de que la entidad a su cargo, inicie el proceso de interconexión e interoperación de las bases de Registro de Datos Públicos que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.

El numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, en los siguientes términos:

“El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”.

La materia sobre la que versa la consulta, se refiere a la aplicación de la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que prescribe:

“SEPTIMA.- Las instituciones del sector público que posean información pública como: el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Nacional de Migración, Dirección Nacional de Tránsito, Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Municipios, Función Judicial, entre otras, deberán integrarse paulatinamente al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos dentro del plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. En caso de que cualquier institución que estuviese en la obligación de interconectarse en virtud de la presente Ley, no lo hiciere, la máxima autoridad de la referida institución podrá ser destituida por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos”.

Del tenor de la norma transcrita se desprende que, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido expresamente incluido entre aquellas instituciones del sector público que poseen información pública, y que están sujetas a la obligación de interconectarse con el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Su consulta exige considerar la finalidad, objeto y ámbito de aplicación de la citada Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, reglados por los artículos 1 y 2 de ese cuerpo normativo. El artículo 1 de la Ley en mención dispone:

“Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros.

El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías”.

De conformidad con el artículo 2 de la misma Ley, su ámbito de aplicación incluye a las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para los usuarios de los registros públicos.

El inciso primero del artículo 4 de la misma Ley de Registro de Datos Públicos prevé que las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información.

Como se observa, de la norma antes referida, las instituciones que administran o en el futuro administren bases de datos, son responsables de su protección, integridad y control, lo que en el contexto de la Disposición Transitoria Séptima del mismo cuerpo legal, que determina la obligatoriedad de las entidades, entre otras, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de interconectarse e integrarse paulatinamente al Registro de Datos Públicos, permite colegir que tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tienen la obligación de proveer la debida protección de la información que poseen en sus bases de datos.

Al efecto, corresponde señalar que existen datos de carácter personal que son confidenciales, según el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que prescribe:

“Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado.

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos.

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer.

La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad”.

Según se observa del mencionado artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, la información confidencial o reservada está relacionada con los datos de carácter personal o atinentes a la intimidad personal frente al ámbito público o privado, cuya difusión o uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales. Dicha información confidencial o reservada podrá ser difundida, siempre que exista autorización expresa del titular de la información, mandato de la ley u orden judicial; y en este sentido, se expresa el numeral 19 del artículo 66 antes citado de la Constitución.

El inciso cuarto del mismo artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, determina que la autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información; y, en caso de dicha información sea difundida de manera ilegal, el Art. 282 del Código Penal, prescribe lo siguiente:

“Todo funcionario público que, sin orden legal del superior competente, descubra o revele, algún secreto de los que le están confiados por razón de su destino, o exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno a cinco años de prisión”.

En concordancia, el inciso tercero del Art. 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referido a la acción de acceso a la información pública, prescribe que: “No se podrá acceder a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas”.

La protección de la información reservada, consta también establecida por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo cuarto inciso prevé que: “Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas, un índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el

índice será considerado como información reservada. Este índice de información reservada, detallará: fecha de resolución y período de vigencia de esta clasificación”.

En cuanto a la reserva de documentos o de la información, merece considerar que al respecto el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, define al término “reserva” como: “Cautela o cuidado para que algo no se sepa”; y, a la acepción “reservado” como: “Documento que no debe tener difusión fuera del destinatario y personas directamente interesadas; débese a razones militares, políticas, de intereses o por afectar a la moral de las personas”.

De ahí que, las entidades que tengan a su cargo bases de datos, tienen la obligación de cuidar su correcta administración frente a terceros, velando para la información cuya difusión o uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales, sólo sea difundida con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial.

Dentro del contexto general que ha sido previamente analizado, en el caso materia de consulta, el tercer inciso del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, que se ha invocado en el informe del Procurador General del IESS, señala en forma expresa lo siguiente: “La información de la historia laboral del asegurado es reservada. El quebrantamiento de la prohibición de revelar los datos contenidos en ella será sancionado con arreglo al Código Penal”.

El artículo 244 de la citada Ley de Seguridad Social, prevé que el Registro de Historia Laboral del Asegurado comprenderá la siguiente información:

- “a. Datos personales del asegurado;
- b. Datos de los familiares dependientes del asegurado;
- c. Fecha de ingreso al Seguro General Obligatorio;
- d. Tiempo de servicios, remuneración imponible y aportes pagados por cada empleador, que serán declarados por éste o por iniciativa del propio afiliado o por comprobación del IESS, de conformidad con las reglas de aplicación de éste Título; y,
- e. En el caso del asegurado sin empleador, aquellos servicios y remuneraciones imponibles por los que haya cotizado o cotizare, dentro de los límites que establecerá la reglamentación”.

Atenta la referencia que ha efectuado el Procurador General del IESS, a la historia clínica de los asegurados, resulta pertinente considerar que, la letra f) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud, declara confidencial la información contenida en la historia clínica de las personas. Dicha norma, dispone:

“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos:

(...) f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis”.

“Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los siguientes derechos:

(...) f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis”.

De las normas que se han citado se desprende que, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, de conformidad con el artículo 1 de la Ley que lo rige, es regular el acceso a la información pública de carácter personal que reposa en las entidades públicas o privadas; al efecto, la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, prevé que las instituciones públicas a las que dicha norma se refiere, entre las que se incluye al IESS, se integren paulatinamente al sistema en un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de esa Ley.

Respecto de la información reservada prevista en los artículos 66 numeral 19 de la Constitución de la República y 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, tal como manifesté anteriormente, dicha información está referida a datos personales o íntimos frente al ámbito público o privado, cuya difusión o uso público puede afectar o atentar contra los derechos humanos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales.

El Art. 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, establece las excepciones al derecho a acceder a la información pública y, entre ellas, la contenida en la letra b) que se refiere a: “Las informaciones expresamente establecidas como reservadas en las leyes vigentes”, de lo que se desprende que terceros no tienen derecho a acceder a información que la Ley ha determinado como reservada, en este caso, a la historia laboral del asegurado, que por disposición del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, tiene el carácter de reservada y que incluye los datos determinados en el artículo 244 ibídem.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe aclarar que la reserva frente a terceros no representa una reserva para entidades que, por mandato legal, deben acceder a información que la Ley ha calificado como reservada, como es el caso de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entidad que administra el Registro de Datos Públicos, al que según la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, deberán integrarse paulatinamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las demás entidades que allí se señalan, dentro del plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigencia de esa ley. En consecuencia, esta facultad otorgada por la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, implica que dicha Dirección

se constituya en custodio de información reservada y le acarrea la responsabilidad de protegerla frente a terceros.

Por lo expuesto, de conformidad con la Disposición Transitoria Séptima de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, por la cual el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras instituciones del sector público, que posean información pública deben integrarse al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, se concluye que la información contenida en el "Registro de Historia Laboral" del IESS debe ser entregada a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, cuya confidencialidad y reserva frente a terceros, deberá mantenerse bajo su responsabilidad, salvo que exista autorización expresa del titular de la información, mandato de la ley u orden judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley antes referida y el inciso tercero del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, para que proceda su difusión al público.

CONCESION DE LICENCIAS

CONSULTANTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

CONSULTAS:

1. "¿En el caso de concesión de licencias sin remuneración para estudios de postgrado, dentro de los convenios de devengación se deben establecer garantías reales o personales, aun cuando la Entidad no destina recursos económico alguno para el efecto, al tenor de lo previsto en el artículo 210 del Reglamento General de la LOSEP?". 2. "De ser positiva su respuesta anterior, ¿cómo se debería calcular el valor de la garantía?".

PRONUNCIAMIENTOS:

1. La letra b) del artículo 211 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, constituye una excepción a la obligación que tiene el servidor beneficiario de una licencia sin remuneración para estudios de postgrado, de que una vez terminados los referidos estudios debe mantenerse laborando en la institución por un tiempo igual al de la duración de los estudios de postgrado; y, consecuentemente la obligación de suscribir el correspondiente convenio de devengación con garantías personales o reales, que es aplicable cuando:

a) La institución no paga la remuneración mensual, b) La institución no paga el valor de los estudios de postgrado, c) La institución no paga los gastos de transporte. Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta, se concluye que, la suscripción del convenio de devengación con garantías reales o personales establecido en el artículo 210 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, es pertinente en los casos de licencia sin remuneración en los que las entidades del sector público asuman los valores a cancelar por concepto de estudios

de postgrado o gastos de transporte del solicitante de la licencia sin remuneración para estudios de postgrado; mientras que, en los casos en los que se otorgue a un funcionario público licencia sin remuneración para estudios de postgrado, en los cuales la institución no pague la remuneración mensual, ni tampoco pague el valor de los estudios regulares de postgrado, ni los gastos de transporte de acuerdo a lo establecido en la letra b) del artículo 211 del Reglamento General a la Ley de Servicio Público el servidor público beneficiario no debe devengar el periodo de tiempo señalado en el artículo 210 del referido Reglamento General, por lo cual consecuentemente, no es procedente solicitar ni establecer garantías reales o personales a favor de la entidad pública en la que preste sus servicios.

2. Mediante oficio No. AL-ULC-571-I la Asesora Legal, Subrogante del Banco Central del Ecuador, manifiesta que: " (...) en el evento de que la Procuraduría General del Estado, considerara que el espíritu de la disposición del artículo 211 del Reglamento General a la LOSEP es únicamente no considerar los 3 años de devengamiento para que se fije garantías en el caso de licencias sin remuneración para estudios de postgrado, esta Asesoría Legal considera que las mismas deberían ser equivalentes a los montos que el servidor habría percibido por concepto de remuneraciones, durante la duración de su licencia, toda vez que la institución le ha asegurado la estabilidad en su cargo, permitiéndole al licenciario que se reintegre al mismo, una vez que se haya culminado sus estudios".

Toda vez que la primera consulta no ha sido atendida afirmativamente, resulta improcedente atender la segunda consulta formulada por la Institución a la que usted representa.

DOCUMENTOS PÚBLICOS: PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS AUTÉNTICAS

ENTIDAD CONSULTANTE: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR CONSULTA:

“¿Es jurídicamente correcto que las instituciones públicas, que aplican el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establezcan en sus reglamentos o estatutos orgánicos las competencias y servidores públicos responsables de la expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados y que dichas competencias alcancen a todo documento producido por la institución de que se trate, inclusive los documentos firmados electrónicamente?”

PRONUNCIAMIENTO:

La Procuraduría General del Estado, con fundamento en el inciso segundo del artículo 13 de su Ley Orgánica y en el artículo 4 de la Resolución No. 17, mediante oficio No. 10643 de 13 de noviembre de 2012, le requirió el criterio del Asesor Jurídico del Servicio Nacional Aduanero, lo cual fue atendido en oficio No. SENAEDGN-2012-1304-OF de 21 de noviembre de 2012, al que adjunta el memorando No. SENAE-DNJ-

2012-0303-M de 18 de octubre de 2012, que contiene el informe de la Directora Nacional Jurídica Aduanera.

En el memorando No. SENAE-DNJ-2012-0303-M de 18 de octubre de 2012, antes señalado, la Directora Nacional Jurídica Aduanera hace referencia al pronunciamiento contenido en el oficio No. 15477 de 26 de julio de 2010, emitido por la Procuraduría General del Estado, en atención a la consulta formulada por el Banco Central del Ecuador; y, sobre el mismo señala que: “es indispensable solicitar al señor Procurador que reconsidere los pronunciamientos emitidos”. Continúa la Directora y hace referencia al Acuerdo No. 718 de 11 de mayo de 2009 que contiene el “Instructivo para Normar el Uso del Sistema de Gestión Documental Quipux para las Entidades de la Administración Pública Central”, el artículo 117 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, los artículos 133 y 147 de la Constitución de la República y concluye con el siguiente criterio jurídico:

“Las instituciones públicas que aplican el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, están plenamente facultadas para establecer, en sus reglamentos o estatutos orgánicos, las competencias y titulares responsables de la expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados y que dichas competencias alcanzan a todo documento producido por la institución de que se trate, inclusive los documentos firmados electrónicamente”.

En la primera consulta del pronunciamiento contenido en el oficio No. 15477 de 26 de julio de 2010, concluí de la siguiente manera:

“Por lo expuesto, considerando que conforme a los artículos 13 y 20 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos se establece que la firma electrónica son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos que identifican al titular de la firma en relación con dicho mensaje, y que el artículo 4 del Reglamento a esa Ley contempla que los mensajes de datos y los documentos desmaterializados deben ser certificados entre otros por la persona autorizada a través de la respectiva firma electrónica, conteniendo la indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico, se concluye que la certificación de información electrónica, debe ser realizada por el funcionario titular de la firma electrónica de la entidad a la que pertenece, cuya certificación deberá contener adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico”.

El pronunciamiento contenido en el oficio No. 15477 de 26 de julio de 2010, se fundamentó en las disposiciones de la Ley Comercio Electrónico, cuyo objeto según el artículo 1 de dicho cuerpo legal es el siguiente:

“Art. 1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de

servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.”

Dentro del contexto anterior, cabe señalar que Banco Central del Ecuador es un organismo regulado por la indicada Ley de Comercio Electrónico, toda vez que es una entidad certificadora debidamente acreditada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, mediante Resolución No. 481-20-CONATEL-2008 de 8 de octubre de 2008.

En todo caso, el pronunciamiento No. 15477 de 26 de julio de 2010 no obsta o limita las facultades de los servidores públicos, a quienes se les haya atribuido la responsabilidad de emitir copias certificadas en cada institución. En cuanto al tema materia de su actual consulta, se debe tener en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 18 numeral 2, prevé que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o privadas, que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en el artículo 4, determina que las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de registros y bases de datos a su cargo, siendo responsables de su veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación.

Concordante con la Ley antes citada, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 10 dispone que es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de esa Ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción.

De los artículos 18 numeral 2 de la Constitución de la República, 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se evidencia el derecho de las personas a acceder libremente a la información que reposa en las entidades públicas y privadas que manejen fondos públicos, así como la responsabilidad de éstas entidades de mantener y proteger la información, registros y bases de datos a su cargo, para permitir un efectivo ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

El Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en el artículo 4, prevé lo siguiente:

“Art. 4.- Información original y copias certificadas.- Los mensajes de datos y los documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo al caso, deberán ser certificados ante un Notario, autoridad competente o persona autorizada a través de la respectiva firma electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado.

Los documentos desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, copia idéntica del documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se emplearán y tendrán los mismos efectos que las copias impresas certificadas por autoridad competente”.

La Norma de Control Interno No. 410-17 de las “Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos”, dispone lo siguiente:

“410-17 Firmas electrónicas

Las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como las personas jurídicas que actúen en virtud de una potestad estatal, ajustarán sus procedimientos y operaciones e incorporarán los medios técnicos necesarios, para permitir el uso de la firma electrónica de conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su reglamento.

El uso de la firma electrónica en la administración pública se sujetará a las garantías, reconocimiento, efectos y validez señalados en estas disposiciones legales y su normativa secundaria de aplicación.

Las servidoras y servidores autorizados por las instituciones del sector público podrán utilizar la firma electrónica contenida en un mensaje de datos para el ejercicio y cumplimiento de las funciones inherentes al cargo público que ocupan.

(...)c) Conservación de archivos electrónicos

Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente se conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó. Para ello se establecerán políticas internas de manejo y archivo de información digital”.

De otra parte, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, que invoca en su consulta, en su artículo 117, prevé:

“Art. 117.- Validez y eficacia de documentos y copias.

1. Cada órgano de la Administración Pública Central determinará en su reglamento orgánico las competencias y titulares responsables de la expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados.
2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que éstos siempre que exista constancia de que sean auténticas.
3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de la Administración Pública Central, siempre que su autenticidad haya sido comprobada.
4. Tienen la consideración de documento público los documentos válidamente emitidos por los órganos de la Administración Pública”.

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, el cual prevé que los mensajes de datos y los documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen, de ser el caso, deberán ser certificados ante autoridad competente y la letra c) de la Norma de Control Interno No. 410-17, que faculta el establecimiento de políticas internas de manejo y archivo de información digital, permiten concluir que es jurídicamente procedente que las instituciones públicas mediante reglamentos o estatutos orgánicos, determinen los servidores públicos competentes para la expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados, inclusive los documentos firmados electrónicamente.

Adicionalmente, en el caso de las entidades comprendidas en el ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, se tendrá en consideración el artículo 117 de dicho cuerpo legal, que establece que cada órgano de la Administración Pública Central determinará en su reglamento orgánico, las competencias y titulares responsables de la expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados, inclusive los documentos firmados electrónicamente.

TERMINACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO DE CONSULTORÍA: IMPROCEDENCIA DE PROCESO DE ARBITRAJE

ENTIDAD CONSULTANTE: INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIAP

CONSULTA:

“(…) ¿Si la resolución de terminación unilateral de un contrato sujeto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es susceptible de ser ventilada en un proceso de arbitraje con el objeto de que un tercero – arbitro, determine su legitimidad, legalidad y procedencia fáctica y jurídica?

De ser negativa su respuesta, consulto: ¿Cuál sería el mecanismo jurídico y ante qué autoridad podría proponer una acción el contratista declarado incumplido de considerarse afectado con la resolución de terminación unilateral de su contrato?

De ser positiva su respuesta, consulto: ¿La institución que represento puede someterse a un proceso de Arbitraje ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito?”

PRONUNCIAMIENTO:

Como antecedentes, en su oficio de consulta, señala los siguientes:

“2.1.- Posterior al procedimiento de contratación de consultoría directa No. (CDCINIAP-AC-005-2011), con fecha 14 de julio de 2011, se suscribió el contrato No. AJ/021-011 entre el INIAP – CONTRATANTE y el consultor Arq. Eduardo Pauta Calle – CONTRATISTA, con el objeto de que se realice el Levantamiento Topográfico y Planimétrico de la Hacienda el Pugro de propiedad del INIAP, el cual deberá incluir soporte técnico georeferenciado y actualizado, descripción de colindantes y deslindes y catastro actualizado.

2.2.- Considerando los constantes incumplimientos del consultor Arq. Eduardo Pauta Calle y frente a la negativa de éste en acatar los requerimientos emitidos por el Fiscalizador y Administrador del Contrato, dando cumplimiento con las disposiciones y procedimientos contemplados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante Resolución No. CD-CP-AC-AJ-DG-010- 28/02/2012, de fecha 28 de febrero de 2012, se resolvió terminar unilateralmente el contrato de consultoría directa No. AJ/021-011 celebrado entre la institución que represento y el Arq. Eduardo Pauta, a quién consecuentemente se lo ha declarado Contratista Incumplido.

2.3. Mediante oficio No. OFI-CODURBAM-1.320, de fecha 04 de julio de 2012, el contratista declarado incumplido, Arq. Pauta, informe que va iniciar el proceso de Arbitraje previsto en la cláusula vigésima del contrato, esto es, ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, para lo cual según su apreciación no se requiere la autorización de la Procuraduría General del Estado”.

El informe jurídico institucional consta en el oficio No. INIAP-AJ-271 de 18 de julio de 2012, suscrito por la Directora de Asesoría Jurídica, quien emite el siguiente criterio jurídico:

“La decisión de terminación unilateral del contrato, como opero en el presente caso, es una potestad unilateral de la administración pública, según la doctrina en Derecho Administrativo, esta facultad se ve reflejada en las cláusulas exorbitantes referentes a la imposición de multas; garantías; y, la terminación anticipada y unilateral del contrato, esta última facultad privativa fue aplicada en la relación contractual que nos

vinculaba con el ex consultor y que se produjo por el incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista incumplido.

La Ley de Arbitraje y Mediación, establece la limitación del Estado y sus entidades para someterse al arbitraje exclusivamente sobre 'las controversias susceptibles de transacción'. Esta delimitación excluiría del arbitraje las diferencias que puedan surgir de una decisión unilateral del Estado, como en el presente caso. Roberto Dromi, especialista argentino en Derecho Administrativo, afirma como principio general que: '...en los contratos administrativos cabe el arbitraje como excepción y con carácter restrictivo, en los casos en que las cuestiones a dilucidar no afecten ni al orden público, ni al orden constitucional, ni agravien a la autoridad del Estado o a su soberanía (...) los árbitros iuris no pueden tomar decisiones que impliquen ejercicio de prerrogativas de la Administración Pública o de funciones esenciales del Estado...'

Es por las consideraciones expuestas, que en mi criterio el acto administrativo de terminación unilateral del Estado no es materia arbitral, y se presume legítimo y ejecutable desde su expedición (...)"

Entre la documentación que en copia certificada se ha remitido adjunta a su consulta, consta el Contrato de Consultoría Directa No. AJ/021-011 (CDC-INIAPAC-005-2011), suscrito entre el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP y el Arq. Eduardo Pauta Calle, en calidad de representante de CODURBAM, el 14 de julio de 2011, por un valor de cuarenta y dos mil ochocientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, según consta de la Cláusula Octava del mismo.

En la Cláusula Cuarta del Contrato en mención, se estipulaba como objeto del mismo "(...) prestar el servicio de consultoría para el Levantamiento Topográfico y Planimétrico de la Hacienda el Pugro, el cual deberá incluir soporte técnico georeferenciado y actualizado, descripción de colindantes y deslindes y catastro actualizado (...)"

En cuanto al plazo, la Cláusula Sexta del Contrato No. AJ/021-011 (CDC-INIAPAC-005-2011), estipula lo siguiente:

"El tiempo de duración de proyecto se estima en 90 días calendario, debiendo el CONSULTOR, sujetarse a la entrega de los documentos en los siguientes plazos:

1. El primer Informe Técnico – Jurídico para la fiscalía, deberá ser entregado no más de 30 días, a partir de la entrega del Anticipo.

2. Los productos antes señalados a los 90 días de indicado oficialmente la consultoría, previo a la presentación del Acta – entrega definitiva del informe final de la Consultoría".

A la consulta se acompañó copia certificada de la “Resolución de Terminación Unilateral de Contrato CD-CP-AC-AJ-DG-010/28/02/2012”, por la cual el Instituto a su cargo, resolvió:

“Declarar terminado en forma unilateral y anticipada el contrato de consultoría directa No. AJ/021-011, suscrito entre el INIAP y el consultor Arq. Eduardo Pauta, con el objeto de realizar el Levantamiento Topográfico y Planimétrico de la Hacienda el Pugno, el cual deberá incluir soporte técnico georeferenciado y actualizado, descripción de colindantes y deslindes y catastro actualizado, ubicada en la Parroquia Chillogallo al sur de la ciudad de Quito, por cuanto el Contratista no ha remediado el incumplimiento que ocasionó el inicio del proceso de terminación unilateral, por lo que se lo declara CONTRATISTA INCUMPLIDO”.

La Cláusula Vigésima del Contrato de Consultoría Directa No. AJ/021-011 (CDC-INIAP-AC-005-2011), suscrito entre el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP y el Arq. Eduardo Pauta Calle, en calidad de representante de CODURBAM, relativa a divergencias y controversias, establecía: “20.1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Quito.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente: (...)”.

Del análisis de la cláusula transcrita, se verifica la ambigüedad de la misma pues, por un lado se establece la posibilidad de las partes para someterse a un procedimiento arbitral, sin que exista una manifestación expresa para aquello. Mientras que por otro, en la misma cláusula aparece un convenio arbitral en el que las partes someten sus controversias a arbitraje.

Esta contradicción trae como consecuencia dudas sobre la existencia de un convenio arbitral válido o la existencia de un compromiso futuro de someterse a la jurisdicción de un tribunal arbitral, lo cual hace que la cláusula pueda ser considerada como patológica.

Sin perjuicio de lo dicho, esta Procuraduría debe adicionalmente referirse a lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución de la República en lo relativo a los métodos alternativos de solución de conflictos:

“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.

En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley”.

En el Derecho ecuatoriano, las instituciones y empresas reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pueden utilizar los procesos de mediación y arbitraje en derecho, que lleven a solucionar sus diferencias, de conformidad con la cláusula compromisoria respectiva. Esta posibilidad procede, en base a la norma constitucional transcrita, siempre que se cuente con la autorización previa de la Procuraduría General del Estado.

El artículo 190 de la Constitución estableció a la contratación pública, como un caso adicional a los establecidos en la Ley de Arbitraje y Medición, en el que se requiere de la autorización del Procurador General del Estado, para someter a arbitraje una controversia.

La Corte Constitucional, mediante sentencia interpretativa No. 001-09-SIC-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 549 de 16 de marzo de 2009 determinó cual es el alcance de dicho artículo, lo hizo en los siguientes términos:

“El artículo 190 (...) Se limita a la Contratación Pública, entendida esta como la relación contractual del Estado con las entidades del sector público y privado, relacionadas, por ejemplo con licitaciones, concurso público de ofertas, etc.”

Vale mencionar, que el artículo 6, número 5 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública define a la contratación pública como: “todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra”. Por lo tanto, de conformidad con lo expuesto, para que proceda el arbitraje en contratación pública, es necesario que previo a la suscripción del convenio arbitral, se cuente con la autorización de la Procuraduría General del Estado.

De los archivos de esta Procuraduría, se desprende que no consta que el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias haya solicitado a este Organismo la autorización para someter a arbitraje controversias que surjan del Contrato suscrito entre el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP y el Arq. Eduardo Pauta como representante de CODURBAM, el 14 de julio de 2011. En tal virtud, al ser éste un requisito esencial para la validez del

convenio arbitral en materia de contratación pública, su omisión vicia de nulidad la cláusula arbitral; y, en consecuencia, al no haberse solicitado dicha autorización en el contrato que motiva su consulta, la misma se torna improcedente, lo que hace innecesario cualquier análisis adicional al respecto.

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS: IMPROCEDENCIA DE CONTRATAR PERSONAS ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA, COMO SERVIDORES PÚBLICOS

ENTIDAD CONSULTANTE: MUNICIPIO DE LORETO

CONSULTAS:

1. Con respecto al inciso segundo del artículo 26 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, en base a qué criterio se debe considerar la oferta más conveniente, si respecto al menor precio, y cuál es el sustento legal.
2. Existe prohibición legal de contratar a un funcionario y/o un servidor público cualquiera, que en calidad de accionistas de una compañía de la que son socios, pudieren y/o pretendan contratar con una u otra institución pública distinta a la que prestan servicios públicos en el Estado.

PRONUNCIAMIENTOS:

1. El Art. 26 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, expresa: "ADJUDICACION.- El comité resolverá sobre la licitación o el concurso público de ofertas dentro del término de diez días contado desde la fecha del vencimiento del señalado en el inciso final del artículo anterior.

En todos los casos, el comité adjudicará el contrato al proponente que hubiere presentado la oferta más conveniente a los intereses nacionales e institucionales".

Esta disposición de adjudicar la oferta más conveniente a los intereses institucionales, ha sido también recogida por el Reglamento de Contrataciones del Municipio de Loreto, expedido mediante Ordenanza Municipal 1, publicada en el Registro Oficial 149 de 21 de Noviembre del 2005.

El inciso tercero del Art. 15, del referido Reglamento, establece que, con el informe técnico, el Comité de Contratación resolverá en el término de diez días la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la institución, la que deberá ser notificada en el término de tres días al beneficiario.

Por su parte, el Art. 34 del mismo Reglamento, dispone, que el Comité de Contrataciones resolverá sobre la licitación o concurso público de ofertas dentro del término de diez días, contados desde la fecha del vencimiento del término concedido a

los oferentes para la formulación de aclaraciones en caso de haberlos, y añade, que la comisión adjudicará el contrato a la oferta más conveniente a los intereses institucionales.

El artículo 16, letra k), de la Codificación a la Ley de Contratación Pública, determina como uno de los documentos precontractuales, el establecer los principios y criterios para la valorización de ofertas.

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido enunciada en el informe del Asesor Jurídico del Cantón Loreto, en su considerando QUINTO, se expresa: “En nuestro medio se tiene una concepción errada de lo que constituye “la oferta más conveniente a los intereses nacionales o institucionales”, ya que no necesariamente es la más baja oferta presentada. Este ha constituido un gravísimo artificio con el que se han presentado muchos oferentes en los procesos de contratación pública, propuestas con las cuales muchas veces han triunfado, y a través del reajuste de precios, el Estado ha terminado cancelando más de lo presupuestado”.

Del mismo modo, en el considerando SEXTO del mencionado fallo, se hace referencia al Art. 5 del Reglamento para el control de la discrecionalidad en los actos de la administración pública, el cual establece, en cuanto al tema de la adjudicación de contratos, que “en los actos de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación sin más, es necesario que la administración valore íntegramente el contenido de las ofertas y del expediente administrativo y que exteriorice justificadamente su decisión”.

De lo expuesto se infiere que para calificar a una oferta como la más conveniente a los intereses nacionales o institucionales, debe entenderse el término “más conveniente”, en todo su contexto, y no únicamente en el aspecto económico, teniendo como referencia que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos a los oferentes en las bases.

2. La letra o) del Art. 26 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, establece como una prohibición de los servidores públicos, el suscribir o mantener contratos con el Estado o sus instituciones, por sí mismos o como socios o accionistas, o miembros de una persona de derecho privado o, por interpuesta persona.

La disposición legal invocada es categórica y no admite interpretación alguna, por lo tanto debe estarse a su tenor literal, conforme a la regla primera del Art. 18 del Título Preliminar del Código Civil.

En consecuencia, resulta improcedente contratar personas para desempeñarse como servidores públicos, que sean accionistas de una compañía que pretenda celebrar un contrato con cualquier institución del Estado.

CONTRATOS EVENTUALES O PLAZO FIJO

CONSULTANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL

CONSULTA:

“¿En sujeción al artículo 14 del Código del Trabajo es legal que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Cristóbal, suscriba contratos indefinidos con trabajadores que han cumplido más de dos años de servicio en forma ininterrumpida en la Municipalidad, bajo la modalidad de contratos eventuales o a plazo fijo?”.

PRONUNCIAMIENTO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código del Trabajo, se concluye que son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, debiendo además puntualizar en estos contratos, las exigencias circunstanciales que motivan la contratación y el plazo de duración. Así también proceden estos contratos para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada. Además, el mencionado artículo 17 regula los contratos ocasionales que son aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un año. De otra parte, de conformidad con los artículos 14 y 184 inciso segundo del mismo Código, que en su orden se refieren a la estabilidad mínima de un año y duración máxima de los contratos a plazo fijo, se concluye que los contratos a plazo fijo tienen una duración máxima de dos años.

Corresponde a la entidad pública consultante, resolver bajo su exclusiva responsabilidad respecto de la suscripción de contratos indefinidos con trabajadores que han cumplido más de dos años de servicio en forma ininterrumpida, bajo las modalidades de contratos eventuales o a plazo fijo que motivan su consulta. De igual manera es responsabilidad de los funcionarios de la entidad los términos y condiciones que aquellos contratos pudieren establecer.